

Octubre 28 y 29 de 1964

43ª REUNION — 4ª SESION ORDINARIA DE PRORROGA

Presidencia del doctor CARLOS H. PERETTE, vicepresidente de la Nación, y del señor senador ANGEL R. FREYTES, vicepresidente 1º del Honorable Senado

Secretarios: señores CLAUDIO A. MAFFEI y CESAR ALBERTO RODRIGUEZ

Prosecretario: señor DELFOR W. CARESSI

SENADORES PRESENTES:

ABDALA, Demetrio César  
ABDALA, Felipe  
ACUNA, Ernesto N.  
ACUNA, Ramón Edgardo  
AGUIAR VAZQUEZ, Américo Angel  
AGUIRRE LANARI, Juan R.  
ASTUDILLO, Félix E.  
BARBICH, Adolfo A.  
BASSI, Ricardo Alberto  
BAUDUCCO, José Raúl  
BERNARDO, Miguel Angel  
BLANCO, Rubén V. M.  
CANTONI, Aldo H. N.  
CAPRARO, Francisco  
CASTIGLIONE, José F. L.  
CORRADI, Luis Mauricio  
DE REGE, Roberto  
FASSI, Santiago Carlos  
FERNANDEZ (h.), Mariano  
FLORES, Domingo  
FREYTES, Angel R.  
GADANO, José Enrique  
GAMOND, Eduardo José Agustín  
GELSI, Celestino  
GHIGLIONE, Alfredo Miguel  
LÓPEZ, Jorge Oscar  
LOVAGLIO, Danté A.  
LUBARY, Ginés A.  
MARTINEZ, José Alberto  
MARTINEZ GARBINO, Lucio José  
MARTINEZ SARAVIA, Miguel A.

MORILLO, Carlos Argentino  
OLMEDO, Rolando  
OVANDO, Ricardo  
RAMÍREZ, Lauro Francisco  
RÍSPOLI ROMAN, Enrique G.  
RODRÍGUEZ, Eugenio L.  
SALMÉN, Miguel  
SAPAG, Elías  
SNOPEK, Guillermo  
TARDELLI, Antonio  
VARELA DÍAZ, Diógenes  
ZINNY, Mario

AUSENTES, CON AVISO:

GONZÁLEZ FUNES, Tomás  
MANCINI, Galileo  
VITTI, Alfonso Andrés

SUMARIO

- 1.—Homenaje a doña Amalia Figueredo de Pietra. (Página 1978.)
- 2.—Homenaje a la Prefectura Nacional Marítima. (Página 1979.)
- 3.—Homenaje al Día de la Policía Federal. (Página 1980.)
- 4.—Decreto de la Presidencia por el que se adhiere al duelo motivado por el fallecimiento del diputado nacional don Oscar Hipólito Santa María. (Página 1980.)
- 5.—Asuntos entrados:
  - I.—Dictámenes de comisión. (Página 1981.)

**II.—Proyecto de ley del señor senador Fernández** por el que se acuerda **pensión** a doña María Matilde Haynes de Romani e hijos menores. (Página 1982.)

**III.—Proyecto de ley del señor senador Salmén** sobre construcción de un edificio para Correos y Telecomunicaciones en Máximo Paz, Santa Fe. (Página 1983.)

**IV.—Proyecto de ley del señor senador Salmén** por el que se otorga **subsidio** a la Biblioteca Popular Estudio y Labor Santiago Pastorino, de Máximo Paz, Santa Fe. (Página 1983.)

**6.—A moción del señor senador Blanco** se fija el plan de labor para la sesión de la fecha. (Página 1984.)

**7.—Homenaje al ex diputado nacional don Oscar Hipólito Santa María.** (Página 1985.)

**8.—Consideración del dictamen de la Comisión de Economía en el proyecto de resolución de los señores senadores Lovaglio y Gelsi** por el que se solicita al señor ministro de Economía que informe sobre presuntas irregularidades en operaciones de crédito cometidas en el Banco de la Nación Argentina. Se aprueba. (Página 1985.)

**9.—Consideración de los dictámenes, en mayoría y minoría, de las comisiones de Legislación General y de Asuntos Constitucionales, Administrativos y Municipales en el proyecto de ley, en revisión, sobre derogación de normas penales.** Se aprueba en general el dictamen de la mayoría. (Página 1992.)

**10.—A moción del señor senador Fassi** se pasa a cuarto intermedio hasta la hora 15. (Página 2029.)

**11.—Apéndice:**

**Sanción del Honorable Senado.** (Página 2029.)

—En Buenos Aires, a los veintiocho días del mes de octubre de 1964, a la hora 18 y 15, dice el

**Sr. Presidente.** — Habiendo número en el recinto, se declara abierta la sesión.

# 1

## HOMENAJE A DOÑA AMALIA FIGUEREDO DE PIETRA

**Sr. Castiglione.** — Pido la palabra.

**Sr. Presidente.** — Tiene la palabra el señor senador Castiglione.

**Sr. Castiglione.** — Señor presidente: con viva emoción vengo a rendir homenaje a una mujer argentina, solicitando adhesión, que la descarto, a los señores senadores. Me refiero a una pionera, a una precursora de nuestra aviación civil; a una mujer que se atrevió —tal como se oye— a desafiar la incredulidad ambiente de una

época en que se creía que la mujer tenía otras funciones sociales y otras actividades que cumplir que la de intentar una aventura por los nuevos caminos del aire, y esa dama, en plena juventud, asida a un verdadero «esqueleto de hierro y madera con alas», mereció hace cincuenta años su brevet de piloto.

He nombrado a doña Amalia Figueredo, cuyas bodas de oro con la aeronáutica argentina y sudamericana, cumplió hace pocos días.

Era entonces, en el año 1914, una fantástica aventura el vuelo mecánico, especialmente para la mujer; requería no sólo fe, voluntad y carácter, sino también coraje para resistir hasta la prevención ambiente, calificada con un significativo juicio: «¡qué audacia!», «¡qué audaz!». Era un desafío a los riesgos de la aviación, que los superó, conquistando su esperanza; probó su temple, dando un ejemplo de alta belleza moral y espiritual. Sembró bien para que otras mujeres siguieran su lección aprendida del que fuera su magnífico inspirador: Jorge Newbery.

Y este homenaje, señores senadores, para la primera aviadora argentina y sudamericana, coincide con una celebración simbólica: la decimotercera Semana de Aeronáutica y Espacial evocación de tributo a la fuerza aérea, que tanto nos enorgullece, por lo que hizo y por lo que proyecta y a la cual, de algún modo, Amalia Figueredo contribuyó con su aporte en lo que sería lo que actualmente ha logrado: ser arma de paz, de seguridad nacional y social, arma de conquista científica en esta era del espacio que estamos viviendo; arma sin armas, sin fronteras ni barreras, que está sirviendo cada vez más hacia una mayor fraternidad internacional.

Amalia Figueredo dio todo de sí, para culminar ofreciendo a su patria un continuador de sus sueños: un hijo aviador, el comodoro don Carlos Petra Figueredo. Y no obstante su alejamiento físico de la máquina, sigue compartiendo su viejo sueño, cerca de la actividad aeronáutica. Pionera y precursora de ese deporte de las nubes, continúa brindando su entusiasta adhesión y experiencia al engrandecimiento de la aviación argentina.

Los primeros aviadores que pisaron estas tierras el año 1910 —franceses e italianos—, que inauguraron el primer vuelo del «más pesado que el aire», con máquinas endebles, de una fuerza de 50 caballos, vieron su fruto, primero entre los hombres, para seguir una mujer, cuatro años después, en esa nueva ruta del aire.

Recibió su brevet de piloto un 19 de octubre de 1914, y realizó su raid Rosario-San Nicolás-Casilda. En Rosario, juntamente con el piloto Antonio Chiumiento, ejecutó vuelos nocturnos; presidió el primer Aero Club Femenino, donde surgiera una magnífica pléyade de pilotos y paracaidistas; se la designó en 1952 socia honoraria a perpetuidad del Círculo Militar de Aeronáutica, reconociéndosela como «precursora»; el Aero Club de Montevideo la distinguió

nada? Porque cuando se estaba realizando la investigación era presidente del Banco de la Nación Argentina el señor Polledo.

Hay que ir al fondo del asunto, señores senadores. Es fácil para la bancada mayoritaria porque no se toca a su gobierno. Sean como la mujer de César. No es posible que nosotros, senadores de la Nación, nos conformemos con este informe por escrito, con el que incluso estoy seguro van a pretender adocenarnos, engañándolo al propio ministro de Economía. No es lo mismo ese informe escrito que una repartición le pasa al ministro y éste a nosotros, que el hecho de venir a dialogar con nosotros. Estando presente y a través del diálogo se conocerán mejor las cosas. Este es un asunto gravísimo, señores senadores. O concurre el ministro a informar o el Senado de la Nación tiene la obligación de designar una comisión investigadora. Nada más.

**Sr. Gamond.** — Pido la palabra.

**Sr. Presidente.** — Tiene la palabra el señor senador Gamond.

**Sr. Gamond.** — Los hechos que ahora se invocan por los autores del proyecto son totalmente distintos de los que motivan el informe por ellos solicitado. Pero de cualquier manera, la comisión no ha abierto ningún juicio, ni está en condiciones de hacerlo, sobre los hechos que aquí se han expuesto, mientras no exista el informe que se solicita, informe que, vuelvo a repetir, por tratarse de hechos ajenos a la gestión normal del ministro de Economía, de hechos de un ente autárquico como es el Banco de la Nación Argentina, y ser muy anteriores a la misma, no pueden tener otra fuente de información que la que el señor ministro recaude de dicho organismo.

Esto hay que comprenderlo bien. No está en el espíritu de la comisión negar ningún tipo de investigación ni de información a la Cámara. Por el contrario, el espíritu de la comisión ha sido que la Cámara tenga la más amplia y eficiente información. Por eso se ha expedido en la forma en que lo ha hecho.

**Sr. Presidente.** — Se va a votar el despacho de la mayoría.

**Sr. Gelsi.** — Pido la palabra.

**Sr. Presidente.** — Tiene la palabra el señor senador Gelsi.

**Sr. Gelsi.** — Voy a pedir a la Cámara que, juntamente con este pedido de informes, se le remita al señor ministro de Economía la versión taquigráfica de la sesión de hoy.

**Sr. Gamond.** — Si me permite, señor presidente, no sé qué es lo que el señor senador Gelsi...

**Sr. Gelsi.** — Para que conozca lo que se dijo.

**Sr. Gamond.** — ... quiere que conozca. El informe que la Cámara va a votar es el que lleva implícito el despacho de la comisión, y que ha sido motivo del pedido de los señores senadores.

Por otra parte, si es a título informativo para el señor ministro, no me opongo a que se proceda así. Pero quiero dejar constancia de que el informe que se pide al señor ministro es el que ha sido motivo —como dije— del despacho de la comisión.

**Sr. Presidente.** — Así es, señor senador Gamond. Lo que solicita el señor senador Gelsi es que se remita, juntamente con el pedido de informes que se va a votar, el texto del debate, que por otra parte es también norma parlamentaria.

**Sr. Gamond.** — No hay inconveniente, señor presidente. Por otra parte, el Diario de Sesiones es público.

**Sr. Presidente.** — Como dije, señor senador, es norma parlamentaria remitir todos los antecedentes.

Se va a votar en general el pedido de informes como ha sido despachado por la comisión, que lleva la firma de los señores senadores Gamond, Bassi, De Rege, Ríspoli Román y Martínez Saravia.

—Se vota y resulta afirmativa.

—En particular es igualmente aprobado.

**Sr. Presidente.** — Queda aprobado.

Se va a votar la indicación del señor senador Gelsi en el sentido de que, juntamente con el pedido de informes, se acompañe la versión taquigráfica de este debate.

—Se vota y resulta afirmativa.

**Sr. Presidente.** — Se procederá en consecuencia.

9

### DEROGACION DE NORMAS PENALES

**Sr. Presidente.** — Se va a tratar el segundo punto del plan de trabajo.

**Sr. Secretario (Rodríguez).** — (*Leyendo*):

**Dictamen en mayoría**

*Honorable Senado:*

Vuestras comisiones de Legislación General y de Asuntos Constitucionales, Administrativos y Municipales, han considerado el proyecto en revisión sobre derogación de normas penales; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconsejan en mayoría, la aprobación del siguiente

#### PROYECTO DE LEY

*El Senado y Cámara de Diputados, etc.*

Artículo 1º — Deróganse los decretos leyes y decretos 4.161/56, 22.490/56, 7.165/62, 8.161/62, 1.296/63, 2.713/63, 1.607/63, 788/63, 3.134/63, 4.200/63, 4.215/63, 4.778/63, 5.175/63, 5.540/63, 5.541/63 y 4.214/63.

Art. 2º — Recobran su vigencia las disposiciones legales derogadas, sustituidas o modifi-

cadadas por los decretos leyes 788/63; 4.778/63 menos los artículos 8º, 9º y 11; incisos a), b) y c) del artículo 12, 15 y 17, segunda parte, de la ley 13.985.

Art. 3º — Incorpórase al Código Penal, como capítulo V del título VIII (delitos contra el orden público), y bajo el epígrafe de... «otros atentados contra el orden público», el siguiente artículo:

Artículo 213 bis. — Serán reprimidos con prisión de un mes a tres años:

- 1º Los que participaren en agrupaciones permanentes o eventuales que, sin estar comprendidos en el artículo 210, tuvieren por objeto imponer sus ideas o combatir las ajenas por la fuerza o el temor.
- 2º Los que participaren en organizaciones o realizaren propaganda basados en ideas o teorías de superioridad de una raza o de un grupo de personas de determinada religión, origen étnico o color, que tengan por objeto la justificación o promoción de la discriminación racial en cualquier forma.
- 3º Los que incitaren a la violencia o realizaren actos de violencia, sea individualmente o integrando organizaciones, contra cualquier raza o grupo de personas de otra religión, origen étnico o color.
- 4º Los que públicamente instigaren a los militares o a los componentes de la fuerza de seguridad a desobedecer las leyes o violar los deberes de la disciplina militar de manera tal que los hechos u omisiones de los instigados sean idóneos para comprometer el orden público.

Art. 4º — Agrégase como última parte del artículo 218 del Código Penal, lo siguiente:

Se aplicarán así mismo a los extranjeros residentes en territorio argentino, salvo lo establecido por los tratados o por el derecho de gente, acerca de los funcionarios diplomáticos y de los nacionales de los países en conflicto.

Art. 5º — Agrégase como segunda parte del artículo 222 del Código Penal (título IX, capítulo II del libro segundo), el siguiente:

Artículo 222. — Será reprimido con prisión de uno a cuatro años el que públicamente ultrajare la bandera, el escudo o el himno de la Nación.

Art. 6º — Reemplázase el artículo 157 del Código Penal por el siguiente:

Será reprimido con prisión de un mes a dos años e inhabilitación especial por uno

a cuatro años el funcionario público que revelare hechos, actuaciones o documentos que por la ley deben quedar secretos.

Reemplázase en el artículo 73, inciso 3º: «salvo en los casos del artículo 154» por: «salvo en los casos de los artículos 154 y 157».

Art. 7º — Incorpórase al Código Penal, como párrafo segundo del artículo 261, el siguiente:

Será reprimido con la misma pena el funcionario que empleare en provecho propio o de un tercero, trabajos o servicios pagados por una administración pública.

Art. 8º — Reemplázanse los artículos 256, 258 y 259 del Código Penal, por los siguientes:

Artículo 256. — Será reprimido con prisión de seis meses a dos años o reclusión de dos a seis años e inhabilitación absoluta por tres a diez años el funcionario público que por sí o por persona interpuesta recibiére dinero o cualquier otra dádiva o aceptare una promesa directa o indirecta, para hacer o dejar de hacer algo relativo a sus funciones, o para hacer valer la influencia derivada de su cargo ante otro funcionario público, a fin de que éste haga o deje de hacer algo relativo a sus funciones.

Artículo 258. — Será reprimido con prisión de seis meses a seis años el que, directa o indirectamente, diere u ofreciere dádivas a un funcionario público, en procura de la conducta reprimida por el artículo 256. Si la dádiva se hiciere u ofreciere a un juez, la pena será de reclusión o prisión de dos a seis años. Si el culpable fuere funcionario público, sufrirá además inhabilitación especial de dos a seis años en el primer caso y de tres a diez años en el segundo.

Artículo 259. — Será reprimido con prisión de un mes a dos años e inhabilitación absoluta de uno a seis años, el funcionario público que admitiera dádivas, que fueran entregadas en consideración a su oficio, mientras permanezca en el ejercicio del cargo.

El que presentare u ofreciere la dádiva será reprimido con prisión de un mes a un año.

Art. 9º — Incorpóranse al Código Penal, como capítulo IX bis del título XI («Delitos contra la administración pública»), bajo el epígrafe: «Enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados», los artículos siguientes:

Artículo 268¹. — Será reprimido con la pena del artículo 256 del Código Penal, el funcionario público que, con fines de lucro, utilizare para sí o para un tercero informaciones o datos de carácter reservado de los que haya tomado conocimiento en razón de su cargo.

Artículo 268<sup>2</sup>. — Será reprimido con reclusión o prisión de dos a seis años e inhabilitación absoluta por tres a diez años, el que al ser debidamente requerido, no justificare la procedencia de un enriquecimiento patrimonial suyo o de persona interpuesta para disimularlo posterior a la asunción de un cargo o empleo público. La prueba que ofrezca de su enriquecimiento se conservará secreta a su pedido, y no podrá ser invocada contra él para ningún efecto.

La persona interpuesta para disimular el enriquecimiento será reprimida con prisión de uno a cuatro años.

Art. 10. — Sustitúyese el artículo 302 del Código Penal, por el siguiente:

Será reprimido con prisión de seis meses a cuatro años e inhabilitación especial de uno a cinco años, siempre que no concurren las circunstancias del artículo 172:

1º — El que dé en pago o entregue por cualquier concepto a un tercero un cheque sin tener provisión de fondos o autorización expresa para girar en descubierto, y no lo abonare en moneda nacional dentro de las veinticuatro horas de habersele comunicado la falta de pago mediante aviso bancario, comunicación del tenedor o cualquier otra forma documentada de interposición.

2º — El que dé en pago o entregue, por cualquier concepto a un tercero un cheque, a sabiendas de que al tiempo de su presentación no podrá legalmente ser pagado.

3º — El que librare un cheque y diera contraorden para el pago, fuera de los casos en que la ley autoriza a hacerlo, o frustrare maliciosamente su pago.

4º — El que librare un cheque en formulario ajeno sin autorización.

Art. 11. — Sustitúyense las siguientes penas establecidas por el Código Penal:

La del artículo 226, por prisión de dos a diez años.

La del artículo 229, por prisión de uno a seis años.

La del artículo 230, por prisión de uno a cuatro años.

La del artículo 265, por reclusión o prisión de dos a seis años e inhabilitación absoluta de tres a diez años.

La del artículo 266, por prisión de uno a tres años e inhabilitación especial de uno a cinco años.

La del artículo 267, por las de prisión hasta cuatro años y de inhabilitación hasta seis años.

Art. 12. — Sustitúyense las palabras «rebelión en el caso del artículo 226 del Código Penal, sedición en el caso del artículo 229 del Código Penal, asociación ilícita o cualquiera de

los comprendidos en el decreto ley 788/63», del artículo 377 del Código de Procedimientos en lo Criminal para la justicia federal y los tribunales de la Capital y los territorios nacionales, reformado por el artículo 24 del decreto ley 2.021/63, por las siguientes:

O cualquiera de los comprendidos en el libro II, título VIII, capítulos 2, 3 y 5, título IX, título X, título XI, capítulo 6, 7 menos los casos de los artículos 260, 262 y 264, capítulos 8, 9 y 9 bis del Código Penal, o en la ley 13.985.

Art. 13. — En los procesos o penas que reconozcan su origen en el régimen de la ley 15.293 se aplicará la disposición contenida en el artículo 2º del Código Penal.

Art. 14. — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 91 del reglamento del Honorable Senado, las comisiones han dispuesto pasar este dictamen directamente al orden del día.

Sala de las comisiones, octubre 27 de 1964.

*José F. L. Castiglione. — Santiago Carlos Fassi. — Lucio José Martínez Garbino. — Adolfo A. Barbich. — Ricardo Alberto Bassi. — Diógenes Varela Díaz. — Ramón Edgardo Acuña.*

#### Dictamen en minoría

Honorable Senado:

Vuestras comisiones de Legislación General y de Asuntos Constitucionales, Administrativos y Municipales han considerado el proyecto de ley en revisión sobre derogación de normas penales; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconsejan, en minoría, su aprobación.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 91 del reglamento del Honorable Senado, las comisiones han resuelto pasar este dictamen directamente al orden del día.

Sala de las comisiones, 27 de octubre de 1964.

*Guillermo Snopek. — Miguel Angel Bernardo. — Domingo Flores. — Rolando Olmedo.*

**Sanción de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación**

(11 de septiembre de 1964)

#### PROYECTO DE LEY

*El Senado y Cámara de Diputados, etc.*

Artículo 1º — Deróganse los decretos leyes y decretos 4.161/56, 22.490/56, 7.165/62, 8.161/62, 1.296/63, 2.713/63, 788/63, 1.607/63, 3.134/63, 4.200/63, 4.214/63, 4.215/63, 4.778/63, 5.175/63, 5.540/63, 5.541/63 y los artículos 157 y 259 del Código Penal (ley 11.179).

Art. 2º — Pónense en vigencia las disposiciones legales derogadas, sustituidas o modificadas por los decretos leyes 788/63 y 4.778/63, menos los artículos 8º, 9º, 11, 12, letras a), b) y e), 15 y 17, segunda parte, de la ley 13.985.

Art. 3º — Incorpórase al Código Penal, como capítulo V del título de los «Delitos contra el orden público» y bajo el epígrafe de «Otros atentados contra el orden público», el siguiente artículo:

Artículo 213 bis. — Será reprimido con prisión de 6 meses a 3 años, el que públicamente instigare o ejecutare actos que provoquen la lucha o segregación de sectores sociales, fundados en motivos religiosos o raciales.

Art. 4º — Agrégase como última parte del artículo 218 del Código Penal, lo siguiente:

Se aplicarán también a los extranjeros residentes en territorio argentino, salvo lo establecido por los tratados o por el derecho de gentes acerca de los funcionarios diplomáticos y de los nacionales de los países en conflicto.

Art. 5º — Incorpórase como artículo 222 del Código Penal (título IX, capítulo 2, del libro segundo), el siguiente:

Artículo 222. — Será reprimido con prisión de uno a cuatro años el que públicamente ultrajare la bandera, el escudo o el himno de la Nación.

Art. 6º — Incorpórase al Código Penal el artículo siguiente:

Artículo 253 bis. — Será reprimido con prisión de un mes a dos años e inhabilitación especial por uno a cuatro años, el funcionario o empleado público que revelare hechos, actuaciones o documentos que por la ley deben quedar secretos.

Art. 7º — Incorpórase al Código Penal, como párrafo segundo del artículo 261, el siguiente:

Será reprimido con la misma pena el funcionario o empleado público que empleare en provecho propio o de un tercero, trabajos o servicios pagados por una administración pública.

Art. 8º — Incorpórase al Código Penal como capítulo IX bis, del título «Delitos contra la administración pública», bajo el epígrafe «Enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados», los artículos siguientes:

Artículo 268<sup>1</sup>. — Será reprimido con reclusión o prisión de dos a seis años e inhabilitación absoluta por tres a diez años, el funcionario o empleado público que, por sí

o por persona interpuesta recibiere dinero o cualquier otra dádiva o aceptare una promesa directa o indirecta para hacer valer la influencia derivada de su cargo ante otro funcionario o empleado público, a fin de que éste haga o deje de hacer algo relativo a sus funciones.

El que diere la dádiva o hiciere la promesa y la persona interpuesta para hacerla o recibirla, serán reprimidos con prisión de uno a tres años.

Artículo 268<sup>2</sup>. — Será reprimido con la pena del artículo 268<sup>1</sup>, párrafo primero, el funcionario o empleado público que, con fines de lucro, utilizare para sí o para un tercero informaciones o datos de carácter reservado de los que haya tomado conocimiento en razón de su cargo.

Artículo 268<sup>3</sup>. — Será reprimido con prisión de seis meses a dos años e inhabilitación absoluta de uno a seis años, el funcionario o empleado público que admitiere dádivas que le fueran entregadas en consideración a su función o empleo. El que presentare u ofreciere la dádiva será reprimido con prisión de un mes a un año.

Art. 9º — Sustitúyese el artículo 302 del Código Penal, por el siguiente:

Será reprimido con prisión de seis meses a cuatro años e inhabilitación especial de uno a cinco años, siempre que no concurren las circunstancias del artículo 172.

1. El que dé en pago o entregue por cualquier concepto a un tercero un cheque sin tener provisión de fondos o autorización expresa para girar en descubierto, y no lo abonare en moneda nacional dentro de las veinticuatro horas de habersele comunicado la falta de pago mediante aviso bancario, comunicación del tenedor o cualquier otra forma documentada de interpelación.
2. El que dé en pago o entregue por cualquier concepto a un tercero un cheque, a sabiendas de que al tiempo de su presentación no podrá legalmente ser pagado.
3. El que librare un cheque y diera contraorden para el pago fuera de los casos en que la ley autoriza a hacerlo o frustrare maliciosamente su pago.
4. El que librare un cheque en formulario ajeno sin autorización.

Art. 10. — Sustitúyense las siguientes penas establecidas por el Código Penal:

La del artículo 226, por prisión de dos a diez años.

La de artículo 229, por prisión de uno a seis años.

La del artículo 230, por prisión de uno a cuatro años.

La del artículo 256, por reclusión o prisión de dos a seis años e inhabilitación absoluta de tres a diez años.

La del artículo 258, párrafo primero, primera parte, por prisión de uno a cuatro años, y reclusión o prisión de dos a seis años la de la segunda parte. La del párrafo segundo del mismo artículo, por la inhabilitación especial de dos a seis años en el primer caso y de tres a diez años en el segundo.

La del artículo 265, por reclusión o prisión de dos a seis años e inhabilitación absoluta de tres a diez años.

La del artículo 266, por prisión de uno a tres años e inhabilitación especial de uno a cinco años.

La del artículo 267, por las de prisión hasta cuatro años y de inhabilitación hasta seis años.

**Art. 11.** — Sustitúyense las palabras «rebelión en el caso del artículo 226 del Código Penal, sedición en el caso del artículo 229 del Código Penal, asociación ilícita o cualquiera de los comprendidos en el decreto ley 788/63», del artículo 377 del Código de Procedimientos en lo Criminal para la justicia federal y los tribunales de la Capital y los territorios nacionales, reformado por el artículo 24 del decreto ley 2.021/63 por las siguientes:

o cualquiera de los comprendidos en el libro segundo, título VIII, capítulos 2, 3 y 5, título IX, título X, título XI, capítulo 6, 7, menos los casos de los artículos 260, 262 y 264, 8, 9 y 9 bis del Código Penal, o en la ley 13.985.

**Art. 12.** — En los procesos o penas que reconozcan su origen en el régimen de la ley 15.293, se aplicará la disposición contenida en el artículo 29 del Código Penal.

**Art. 13.** — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

ARTURO MOR ROIG. \*  
Guillermo González.

**Sr. Presidente.** — La Presidencia desea aclarar que hay al respecto dos despachos, uno de mayoría y uno de minoría. Los señores senadores dirán si se procede a la lectura de dichos despachos, teniendo en cuenta que tienen el texto de los mismos sobre sus bancas.

**Sr. Acuña (R. E.).** — Pido la palabra.

**Sr. Presidente.** — Tiene la palabra el señor senador Acuña.

**Sr. Acuña (R. E.).** — Hago indicación de que no se dé lectura, señor presidente, ya que los

señores senadores tienen los despachos impresos sobre los pupitres.

**Sr. Presidente.** — Está en consideración la indicación del señor senador Acuña de que se suspenda la lectura de los despachos. Si hay asentimiento, así se procederá.

—Asentimiento.

**Sr. Presidente.** — Tiene la palabra el señor miembro informante del despacho de la mayoría, senador Fassi.

**Sr. Fassi.** — Señor presidente: con fecha 21 de abril de este año, tuvo entrada en la Honorable Cámara de Diputados de la Nación un proyecto del Poder Ejecutivo que en sus fundamentos decía que se proponía la derogación de normas penales contrarias a la Constitución, y la sanción de otras que configuran la máxima urgencia en materia de legislación penal de fondo. Con ello el gobierno cumplía compromisos programáticos contraídos por la Unión Cívica Radical del Pueblo.

La iniciativa ha prosperado en la Cámara de Diputados de la Nación aun cuando con reformas parciales. Las comisiones de Legislación General y de Asuntos Constitucionales, Administrativos y Municipales han considerado el proyecto en revisión sobre derogación de normas penales, y también las reformas introducidas en nuestro régimen penal por la Cámara de Diputados, y lamentablemente no han podido llegar a un acuerdo unánime. Informo el despacho de la mayoría; no existen reformas sustanciales en cuanto al objeto principal del dictamen que estamos considerando, es decir a la extensión o amplitud que tiene la derogación de las denominadas leyes represivas. En ese sentido nuestro despacho coincide totalmente con el de la minoría, o sea con la sanción de la Honorable Cámara de Diputados. Hemos querido borrar del ordenamiento legislativo todo lo que pueda significar delito de opinión, y con respecto a la legislación que es de urgencia para poner al día nuestro ordenamiento penal, la mayoría de la comisión disiente con el criterio seguido por el despacho que nos ha venido en revisión.

Yo sé, señor presidente, que para afirmar la necesidad de aceptar ese despacho se van a invocar principalmente razones de urgencia, pero creo que en la función de dictar leyes el legislador debe preocuparse ante todo del problema de la eficacia de la regulación jurídica que sanciona. De manera que no puede ser que por la prisa de pocos días se acepte un despacho que pueda mejorarse, y nosotros entendemos modestamente que hemos mejorado el despacho de la Cámara de Diputados.

La derogación de los decretos leyes en materia represiva vuelve a replantear el problema de la validez de los decretos leyes. Y esta Honorable Cámara conoce mi criterio personal; cuando se trató sobre la validez de todos los decretos



leyes me incliné por la invalidez de los mismos, una vez instalado el gobierno de jure, en cuanto a su vigencia futura, y en tanto no fueran convalidados por un acto legislativo válido. Y yo afirmo, señor presidente, que ese criterio tiene validez universal; sobre todas las materias comprendidas en el artículo 67 de la Constitución Nacional no hay otro proceso legislativo válido que el que siga los cauces de los artículos 68 a 73 de nuestra Constitución. En consecuencia, afirmo que las leyes represivas no son inválidas por su sustancia sino por su forma, por el proceso de su sanción.

El artículo 18 de la Constitución Nacional, por tanto, no es la razón de su invalidez sino que ella depende de que los decretos leyes no son leyes y se hace la aplicación en materia penal del principio *nulla poena sine lege*. La única diferencia que hay entre los demás decretos leyes y los decretos sobre materia represiva es que en los casos del derecho común la convalidación puede tener efecto retroactivo y en cambio en materia penal la convalidación no puede tener ese efecto retroactivo porque nadie puede ser juzgado por un hecho delictivo sino por ley anterior al hecho del proceso. Pero es que tenemos que partir de la base de que se ha sancionado una ley convalidando todos los decretos leyes, y por este camino, con miras al futuro, los decretos leyes en materia represiva han quedado convalidados en la misma medida que todos los demás decretos leyes que legislaban sobre otras materias propias de la legislación del Congreso Nacional. Así, por ejemplo, mientras no sancionemos la derogación expresa regirán las disposiciones que modifican el artículo 302 del Código Penal con respecto al libramiento de cheques sin provisión de fondos y demás figuras delictivas relativas al mismo.

Sentado este principio o criterio orientador, que servirá para precisar por qué nosotros hablamos de la derogación de los decretos leyes, debemos tratar los represivos en su sustancia y considerarlos desde el punto de vista de su constitucionalidad. Yo entiendo, señor presidente, que han entrado, en cuanto coinciden con los principios constitucionales y las garantías constitucionales, en el ordenamiento jurídico con motivo de nuestra sanción, que yo por mi parte he resistido con mi voto. Desde ese ángulo la función del Congreso consiste en derogarlos si entiende que son inconvenientes, pero no puede juzgar sobre su constitucionalidad. El control de constitucionalidad de las leyes no incumbe al Congreso sino al Poder Judicial; es una función judicial.

Esto no quiere decir que el legislador, cuando legisla, no se preocupe de que la ley que dicta se ajuste al ordenamiento constitucional. En la oportunidad de dictar las leyes hace la valoración de si la ley está de acuerdo con el ordenamiento constitucional, es decir, si entra en el marco que fija para la legislación la Constitución Nacional. Pero cuando se encuentra con

que en el ordenamiento jurídico existe una ley que según su valoración es inconstitucional, el Congreso no debe declararla tal; lo que puede hacer es derogarla para que no siga subsistiendo si no coincide con el espíritu de la Constitución Nacional. Por eso, el dictamen de la mayoría, coincidiendo con el de Diputados, insisto, dispone la derogación de los decretos leyes; no su invalidez ni su inconstitucionalidad.

Es más, señor presidente: no nos atrevemos a afirmar que todos esos decretos leyes sean inconstitucionales en su sustancia; más bien, los derogamos como inconciliables con nuestro sentido político, con una valoración política contraria a los delitos de opinión. Repudiamos el delito de opinión y sobre todo creemos en la ineficacia de su represión. Esto, señor presidente, es una enseñanza de la historia, que evidencia que cuanto más saña acompaña a la persecución ideológica, mayor vigor logra esa ideología en sus propios prosélitos.

Así, por ejemplo, nosotros no consideramos que no se puedan dictar leyes protectoras de las instituciones democráticas. Cuando derogamos las leyes represivas de ninguna manera renunciamos al derecho de dictar leyes protectoras de las instituciones democráticas. Y éste no es un pensamiento que corresponda a nuestro sector. Es un pensamiento expresado por los principales órganos internacionales y es un pensamiento que, cuando la reforma constitucional de 1949, fue incorporado como texto positivo de la misma. En el Diario de Sesiones de Diputados se recoge el pensamiento de nuestra Facultad de Derecho de Buenos Aires, que consultó a los señores profesores doctores Rafael Bielsa, Carlos A. Erro, José Antonio Gomariz, Alberto G. Padilla y Juan Silva Riestra, quienes sostuvieron la posibilidad de que las instituciones democráticas se defienda mediante leyes protectoras contra los actos fraudulentos o de fuerza que desvíen el proceso democrático y traten de extinguirlo.

Pero no vale la pena, señor presidente, formular declaraciones que resultarían puramente académicas, si entendemos que no es materia de discusión la amplitud de la derogación de las leyes que se refieren al delito de opinión, puesto que no hemos dado un paso atrás con la sanción de Diputados y consideramos no haber dejado ninguna en pie.

Nuestra divergencia comienza con respecto al criterio de lo que es urgente en materia de reforma penal. Hemos creído que la Cámara de Diputados se ha quedado corta en la determinación de las figuras jurídicas que deben entrar en nuestro sistema positivo aun antes de que emprendamos la tarea de mayor aliento de la reforma total de nuestro Código Penal.

Había figuras delictivas propuestas por el Poder Ejecutivo que fueron inconvenientemente desechadas. Tal, principalmente, la sanción al enriquecimiento de los funcionarios. Desde el año 1936 se suceden los proyectos tendientes a



combatir esta lacra de nuestras costumbres políticas y, por un motivo o por otro, por razones de circunstancias que no tienen volumen ni entidad, se ha ido demorando lo que se reclama para la salud moral de la República.

También es necesario que contemplemos el proceso de las agrupaciones o bandas organizadas para imponer sus ideas o para impedir las ajenas, mediante los recursos del temor o el ejercicio de la violencia.

Y finalmente, se hacen necesarias reglas que tiendan a evitar el quebramiento de la disciplina militar con el fin de alterar el orden público. Hemos redactado así fórmulas que no coinciden exactamente con las del Poder Ejecutivo en un afán de acercarnos al ideal de concreción y claridad que debe acompañar a los textos tipificantes de delitos. Tarea difícil es ésta; ojalá hayamos tenido fortuna.

Pero como hemos avanzado sobre distintos terrenos del derecho penal, nuestro informe no puede consistir en una mera generalización. Yo no he coincidido generalmente con el criterio que está arraigado en nuestras prácticas legislativas, que convierte los informes en general en el examen panorámico de las cuestiones, sin penetrar en los detalles, porque resulta luego que no se hace con la debida amplitud el debate en particular, y, entonces, las leyes nacen sin la primera fuente de interpretación que es la opinión del legislador, el espíritu que el legislador ha querido trasfundir a la norma que ha dictado.

Es por ello que, aun a trueque de ocupar por un instante la atención de la Honorable Cámara, me he de ocupar circunstanciadamente de los artículos que propugno, sobre todo porque algunos de ellos son reiteración de textos que han sido desechados por la Honorable Cámara de Diputados, con la formulación de argumentos que entiendo que pueden y deben ser rebatidos.

Por el artículo 1º se confiere a la derogación de las normas penales la misma amplitud que recibiera la sanción de Diputados.

Hemos insistido en esa política generosa, no obstante ser nuestra labor contemporánea con ciertos desbordes contrarios a la paz social y tendientes a crear un clima de violencia y de enfrentamiento, avivando pasiones todavía encendidas.

Si se continúa esa conducta, tal vez haya que tomar medidas judiciales o policiales por la vía de la ordenanza o de la ley, que no repudia nuestro sistema institucional.

Por ahora despejamos el terreno de cualquier mención a aspectos derogatorios que no sean los de los decretos leyes.

Queremos que la derogación exclusiva de los decretos leyes tenga el sentido de una advertencia en cuanto a que no es la oportunidad de los gobiernos defacto la propicia para aumentar el arsenal represivo. Entendemos, con la Corte

Suprema del año 1931, que ninguna razón de urgencia es suficiente para que los gobiernos defacto dicten leyes que restrinjan la libertad y entrañen penas.

Tampoco hemos reparado en que algunos de los decretos leyes que se derogan responden a contingencias nacionales que en el derecho comparado han dado lugar a medidas represivas. Creemos que en nuestro país no se dan las circunstancias de peligro que las justifique. Este afán nuestro de deslindar la esfera de los decretos leyes de la correspondiente a las leyes auténticas, a las leyes vigentes, a las dictadas de acuerdo con las normas de los artículos 68 y siguientes de la Constitución Nacional, nos ha aconsejado suprimir del artículo 1º la mención a la derogación de los artículos 157 y 259 del Código Penal. Además, hemos seguido este criterio porque esos artículos, a pesar de lo que se expresa en el artículo 1º de la sanción venida en revisión, no se suprimen sino que se modifican y reubican. Preferimos conservarlos en el código en su lugar, aprovechando nuestra experiencia jurídica para mejorarlos.

Trataré en consecuencia lo relativo a ambos artículos, aun cuando de ellos se trate más adelante en nuestro despacho, para justificar la supresión operada en el artículo 1º.

Veamos la modificación del artículo 157 del Código Penal. El mismo integra el capítulo de los delitos contra la inviolabilidad de los secretos; tiene una redacción defectuosa en cuanto no indica que la pena alcanza solamente al funcionario que divulgare actuaciones o procedimientos que por la ley deben quedar secretos. Sin embargo, la doctrina de los autores, tales como Soler, Eusebio Gómez, González Roura, etcétera, y la jurisprudencia, han entendido que el artículo no comprende la revelación de secretos por los particulares. A pesar de ello, con la misma redacción y ubicación pasaron al proyecto de 1937, artículo 199, y al proyecto de Peco de 1941, artículo 185.

Contra esa solución tradicional reacciona el proyecto Soler de 1960, que lo incluye en el título XVI, Delitos contra los deberes de la función pública, capítulo I, Abuso de autoridad, artículo 339. En ambos, en el código vigente, en el proyecto Peco, en el proyecto de 1937 y en el proyecto de 1960, es un delito menor castigado con pena no privativa de la libertad. Por el proyecto del Poder Ejecutivo se aumenta la pena y se lo ubica en el título XI, Delitos contra la administración pública, capítulo IV, Abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios públicos.

Consideramos que el aumento de la pena es razonable, pero la reubicación debe diferirse para una reforma total del Código y la fijación de una nueva sistemática. Recién entonces habrá que apreciar cuál es el bien jurídico principal que la norma ampara: si la fidelidad administrativa o los fueros de la persona humana en

cuanto a la inviolabilidad de su secreto, que ha debido develarse en el orden administrativo pero que no debe trascender más allá de dicho orden. Además, la reubicación carece de significación suficiente para justificar su inclusión en una reforma parcial, y es inconsecuente, pues deja en el lugar que actualmente ocupa, la violación del secreto de la correspondencia cuando la comete el empleado de Correos, que también es funcionario público, es decir en el caso del artículo 154.

A propósito, señor presidente, y antes de avanzar, para la debida interpretación de esta ley por nuestros tribunales, si se sanciona, debo decir que consideramos equivalentes los conceptos de funcionario y de empleado público, tal como lo establece expresamente el artículo 77, inciso 4º, del Código Penal. De manera que el distingo que hace el proyecto del Poder Ejecutivo, y la insistencia de la Honorable Cámara de Diputados de enunciar en cada disposición funcionario público o empleado público, nos parece totalmente ocioso cuando ya en el código se dice en forma expresa que ambos conceptos se equivalen. De manera que en el espíritu de nuestra legislación, cuando decimos funcionario público comprendemos a todo empleo público, cualquiera sea su jerarquía.

Si se traslada el artículo 157 con motivo de este proyecto, debió hacerse lo mismo con el 154. Pero se trata de otra cosa. Obsérvese que se castiga la develación de un secreto por un funcionario público, y esto nos obliga a formular una pregunta de cuál es el bien jurídico principal afectado. Aun cuando el bien jurídico principalmente protegido es el derecho de la persona física a la inviolabilidad de sus secretos, cuando el delito lo comete un funcionario cobra una jerarquía especial. Yo entiendo que sigue siendo lo principal, como bien jurídico, la inviolabilidad del secreto del particular, porque pongo por encima de todo la personalidad humana con sus derechos inviolables. Pero cuando se trata de la violación del secreto, se lo considera un delito de instancia privada y, en cambio, cuando se trata de la violación de un secreto por un funcionario público, la circunstancia de que el violador es un funcionario público, matiza con un nuevo color el hecho. Pero esto no justifica el traslado del artículo a las que hacen a la conducta del funcionario público, sino que lleva en nuestro despacho la modificación del artículo 73, inciso 3º, que excluye de las acciones.

También la sanción de la Cámara de Diputados suprime el artículo 259. En realidad, modifica los artículos 256 y 259, pero al 259 no lo borra, sino que lo transfiere de su actual ubicación, capítulo VI, a otra posterior que constituiría el capítulo IX bis, denominado «enriquecimiento ilícito de funcionarios».

Vale decir que la Cámara de Diputados ha seguido el proyecto del Poder Ejecutivo, artículo 9º. No nos parece aconsejable la deno-

minación ni la reubicación. En nuestra terminología jurídica y aun en el habla vulgar la conducta incriminada se denomina cohecho. Es el hecho de sobornar o corromper al juez o al funcionario público para que haga o deje de hacer contra razón o derecho. González Roura tipifica ese delito con estos elementos: a) la calidad de funcionario público en uno de los sujetos del hecho, o en ambos; b) una dádiva que se da o que se promete y que es recibida o aceptada; y c) la condición de hacer o dejar de hacer algo relativo a sus funciones.

Peco dice que es el *crimen repetundarum* del derecho romano, la *corruzione* del derecho italiano, la *Bestechung* del derecho alemán, la *bribery* y *corruption* del derecho inglés.

Si debiera modificarse el nombre correspondería, frente a tales antecedentes, denominarlo corrupción y no enriquecimiento ilícito, que es una figura más amplia, pues comprende todo supuesto por el cual el funcionario público lucrare directamente por sí o por un tercero mediante el ejercicio de su cargo o de la influencia derivada del mismo. Es decir, el enriquecimiento ilícito es el género y el cohecho una de sus especies.

No vemos pues, la razón para desplazar las reglas del código mientras no se cambie toda su metodología mediante la sanción de uno nuevo. Es cierto que el artículo 259 no contiene todos los ingredientes que configuran el cohecho, pero se le asemeja. La dádiva es un medio de corrupción. No se ofrece para exigir de los funcionarios determinada acción u omisión, pero al funcionario se lo ablanda, se lo corrompe. Querer separar esa figura delictiva del cohecho es un exceso de pureza doctrinaria impropia de los textos positivos. Así se entendió en el informe del proyecto de 1891, donde se lee: «Este caso se asemeja a los demás del cohecho en que el delincuente se propone corromper la conducta del funcionario, predisponiéndolo a su favor, y se distingue en que no aparece manifiesto el propósito de obtener inmediatamente un acto determinado de parte del funcionario. En un país republicano, con más razón que en cualquier otro país civilizado, los funcionarios públicos deben estar a cubierto de toda sospecha de inmoralidad, y para ello la ley penal debe reprimir los hechos que tiendan a arrojar esta clase de sospecha, como los regalos que la amistad particular no justifica y que son, por decirlo así, la forma más refinada del cohecho».

Con respecto al artículo 259, solamente modificamos la pena que era de inhabilitación absoluta de uno a seis años en el Código Penal y que reemplazamos por la prisión de un mes a dos años, además de la citada inhabilitación absoluta.

En el artículo 2º conservamos el artículo 2º del despacho de Diputados. Los decretos leyes

788/63 y 4.778/63 contenían la derogación de normas positivas anteriores de la ley 13.985, y ésta, de otras normas del Código Penal. Convenía decir si esas normas que habían derogado los decretos leyes volverían a regir: se lo dice expresamente, fijando sus límites. Como rigieron, como dejaron de regir, como regirán de nuevo, entendemos mejor la terminología empleada que la del Poder Ejecutivo y la de la sanción de Diputados. Los textos que recobran vida no se declaran vigentes; no se dice que se ponen en vigencia. Se dispone expresamente: recobran su vigencia, la que tuvieron antes de los decretos leyes y perdieron durante la vigencia de éstos.

Donde las innovaciones no son de detalle y marcamos una orientación distinta a la de la Cámara de Diputados es en la reforma que introducimos en el artículo 3º, especialmente con relación a lo que denominamos artículo 213 bis: «Serán reprimidos con prisión de un mes a tres años: 1º) los que participaren en agrupaciones permanentes o eventuales que, sin estar comprendidas en el artículo 210, tuvieran por objeto imponer sus ideas o combatir las ajenas, por la fuerza o el temor...»

El Poder Ejecutivo proyectó reprimir con prisión de uno a cinco años a los que participaren en agrupaciones permanentes o eventuales que, sin estar comprendidas en el artículo 210, tuvieran por finalidad el ejercicio de violencias contra las personas o las cosas por el solo hecho de su participación. No es posible, por falta de tiempo o por no abusar del tiempo de esta Cámara, seguir las peripecias de este artículo en la discusión de Diputados. Se le imputó ser una reiteración innecesaria del artículo 210 o punir hechos intrascendentes. Yo diría que con la latitud con que fue proyectado se explicaba la repulsa. Si se quisiera castigar la violencia de la patota, sería excesivamente severo. Mientras la actividad de ésta no desemboque en violencia contra las personas o las cosas, es más bien materia de falta que de delito; si lesiona a las personas o daña las cosas, invade otra esfera delictiva y en consecuencia tiene la condigna sanción. Lo que entiendo que quiso el Poder Ejecutivo y lo que quiere la mayoría de la comisión es otra cosa: reprimir ciertas formas morbosas de las ideologías que no se conforman con sustentar la propia, sino que quieren impedir la ajena. No se trata, como en el caso del artículo 210, de una asociación de delincuentes. No se propone cometer delitos comunes, sino imponer una ideología utilizando la fuerza o el temor. Claro que entra en la figura un *animus* ideológico. Eso es lo que resulta particularmente peligroso para el resguardo de la libertad de pensar y creer, y para la formación racional de la conciencia pública. Pero el *animus* ideológico no es de una prueba imposible, según lo enseñan tanto la experiencia propia como la foránea. Así empezaron el fascismo y el nacionalsocialismo. Así ac-

túan públicamente ciertos grupos de derecha y de izquierda.

No es cierto que lo que se castiga es la alteración del orden público en sí, sino la posibilidad de esa alteración. Quiero significar expresamente que es un delito de peligro, no de resultados. La violencia no es aquella que necesariamente se traduzca en fuerza en las personas o en las cosas, que configure delitos específicos ya que de ser así, entraría en la sanción el artículo 210; es la de infundir temor, la que priva a la persona que la sufre de su libre determinación; es la que satisface en otras el instinto que lleva a la violencia y al matonismo. El temor que se infunde rebalsa y excede los hechos específicos que configuran el delito de intimidación pública, artículos 211 y 212 del Código Penal.

Si el agrupamiento de personas y voluntades es para cometer los delitos de los artículos 211 y 212 del Código Penal, habrá asociación ilícita, figura que se conserva en todo su integridad. Si la fuerza o el temor siguen otras vías, se incurrirá en el delito del artículo 213 bis, inciso 1º.

Yo quiero que se me interprete con claridad. De ninguna manera pretendemos introducir por esta vía un delito de opinión. Entiendo que todas las opiniones son respetables y, en consecuencia, deben expresarse libremente, sin que la fuerza o la coacción intervengan para torcer la conciencia de nadie. Así como no queremos al Estado gendarme, tampoco queremos fuerzas organizadas dentro del Estado para que atenten contra la más amplia libertad de conciencia y de pensamiento. Esa es la razón que inspira la inclusión del primer inciso del artículo 213 bis.

Me ocuparé ahora de los incisos 2º y 3º del mismo artículo 213 bis, que es otra de las materias que se han debatido ampliamente en la Honorable Cámara de Diputados. Es la que se refiere a la discriminación racial, étnica, religiosa o de clases.

La Honorable Cámara de Diputados no aceptó el texto del Poder Ejecutivo. Fue feliz en el sentido de excluir toda mención a la lucha de clases, porque conocemos su proceso histórico, y mientras se desarrolle en el terreno ideológico es necesaria para la justicia social y para estructurar dentro de la libertad y la democracia nuevas formas de convivencia económica. Pero no fue feliz en cuanto a la discriminación étnica, porque llega a un texto de excesiva vaguedad.

Yo comprendo, señor presidente, la razón de esa vaguedad, porque se trata de una conducta ilícita, difícil de aprehender. Sin embargo, por la afloración internacional del problema, la configuración delictiva ha sido materia de análisis por las Naciones Unidas. Este organismo internacional ha pedido a los Estados miembros que erijan en delitos determinadas figuras que el mismo ha tipificado.

¿Qué mejor, entonces, señor presidente, en vez de intentar una fórmula criolla, que incorporar

estos textos tipificados por las Naciones Unidas, que nuestro país se ha comprometido a punir?

¿Qué mejor camino que tomar estos textos y convertirlos en la figura tipificante que vamos a punir en el artículo 213 bis?

No obstante, al texto de las Naciones Unidas le hemos agregado un elemento. Como contemplaba el problema judío y el de los negros, tenía en cuenta exclusivamente los aspectos étnicos y raciales. Pero como las luchas también pueden producirse por motivos religiosos, agregamos también la discriminación religiosa. Las mismas razones de orden público abogan para que no se admitan discriminaciones religiosas, aun cuando afortunadamente no han prosperado en nuestro medio.

Por lo tanto, señor presidente, doy como fuente de los dos textos proyectados la tipificación de las Naciones Unidas.

En virtud del artículo 2º, la punición alcanza a «los que participaren en organizaciones o realizaren propaganda basados en ideas o teorías de superioridad de una raza o de un grupo de personas de determinada religión, origen étnico o color, que tengan por objeto la justificación o promoción de la discriminación racial o religiosa en cualquier forma».

El artículo 3º dispone: «Los que incitaren a la violencia o realizaren actos de violencia, sea individualmente o integrando organizaciones, contra cualquier raza o grupo de personas de otra religión, origen étnico o color.»

Se reprime a la organización que no se concreta a sostener ideas o teorías de superioridad de una raza o de un grupo de personas de determinado color, religión u origen. Insisto en este concepto. Es posible organizar entidades que afirmen la superioridad de una raza, de un grupo de personas de determinado color o de una religión u origen étnico.

Si nosotros nos opusiéramos a estas organizaciones crearíamos el delito de opinión. La exaltación del grupo racial, étnico o religión propia, es lícito y ponderable. Puede ser una exigencia a la superación y redundar en un aporte mayor al progreso económico, ético o cultural. Lo que no es lícito es aprovechar esa exaltación racial o religiosa para enderezarla a la desarmonía social, convirtiéndola en una actitud discriminatoria en contra de otro grupo humano, rompiendo la paz o el orden público.

Esta figura, señor presidente, a que me he referido, es también un delito de peligro, no de resultado. La actividad debe ser idónea para alterar el orden público. Lo principal debe ser el proceso discriminatorio.

Como los señores senadores observan, las Naciones Unidas han considerado útil distinguir la organización tendiente a propagar la discriminación racial, que hace a la formación del clima en que se desencadenará la violencia, del acto particular o colectivo, de incitar a ella o realizarla por los referidos motivos discriminatorios. De ahí que en nuestro artículo 213 el

inciso de Diputados se desglose y se convierta en dos figuras delictivas distintas, aunque enderezadas al mismo fin.

Por el inciso 4º del artículo 213 bis, volvemos a insistir en la necesidad de castigar a los que perturban a las fuerzas armadas, tratando de apartarlas de sus funciones específicas. Pretenden la rebelión o la sedición, pero no llegan a la tentativa. Por lo tanto, su actividad contraria al orden público no está punida. Muchos argumentos se han hecho para no admitirla. Se afirma, señor presidente, que sólo condena al fracaso. Con ese criterio no habría que suprimir esta nueva figura delictiva; habría que suprimir el delito de rebelión y sedición, porque efectivamente el éxito es la regla del consentimiento de los pueblos, y cuando hay un éxito no hay castigo, tampoco, de rebelión y sedición.

Pero, señor presidente, la rebelión triunfante es una fatalidad ineludible; sólo se le puede oponer otra rebelión sucesiva y triunfante. Es catastrófica y breve. Lo que no puede ser es que a esta catástrofe, que tantos males ha hecho en el país, porque a medida que transcurre el tiempo vamos calificando de malas a las revoluciones, se agrave por la perturbación constante, por el oficio de conspirador, que tiene un efecto deletéreo que pronto calificaré.

En el texto del Poder Ejecutivo no tiene una configuración suficiente. Se observó en Diputados que incitar al soldado a desabrocharse la casaca es contrario a la disciplina militar; por eso es que en nuestro despacho se agrega que el hecho de indisciplina será punido cuando la conducta del instigador pueda comprometer el orden público.

Se me ha observado, señor presidente, que es una cláusula sobreentendida, ya que el capítulo se denomina «Otros atentados contra el orden público», pero sirve para fijar mejor un límite, y sirve además para otra cosa: para determinar que todo el artículo 213 bis consagra delitos de peligro y no de resultados, porque el éxito de la conducta del instigador debe ser suficiente para comprometer el orden público. No es necesario que lo comprometa.

Existe, señor presidente, la creencia de que se trata de una innovación criolla, circunstancial, producto de los días tormentosos que hemos vivido. Yo diría que durante días y días no pudimos ausentarnos de nuestro hogar ni llegar a un lugar público, no podíamos hablar con alguien, sin que nos informaran de la próxima revolución que iba a estallar en el día o al siguiente, o de la otra revolución, y que había gestores de revoluciones que sin duda alguna no se concretaban solamente a la faz civil, sino que iban a perturbar la paz de los cuarteles. Pero no es ése el fondo de nuestro texto.

Yo afirmo, señor presidente, que en esa materia no hay nada nuevo bajo el sol. El antecedente remoto es la ley francesa del 27 de julio de 1849, que reprimía la provocación directa a los militares con el propósito de hacerlos desis-

tir de sus deberes profesionales, y de la obediencia a sus superiores. En Francia, por aquellos años, tuvieron también sus épocas de tormenta, y naturalmente recurrieron a este remedio. Se dictó luego otra ley, cuyo artículo 25 ampliaba la figura con la expresa mención de que tendía a asegurar la defensa de la Constitución republicana: Sigue la ley italiana del 19 de julio de 1894, que es el antecedente del artículo 266 del Código Penal italiano, que muchos juzgan peyorativamente porque dicen que es un código fascista, pero indudablemente recogió una experiencia jurídica anterior, puesto que repite el mismo concepto de la ley de 1894. Del Código Penal italiano, artículo 266, el doctor Peco, en su proyecto del año 1941, tomó el precepto y lo incorporó como artículo 299.

Como observan los señores diputados, no obedece a motivos pequeños y circunstanciales de la actualidad, sino a todo un proceso legislativo que, de hurgar un tanto más en el derecho comparado, podría ser motivo de otras citas.

Cuando tiene la entidad que nuestro texto exige, enerva las energías del Ejército y de la Marina, exponiéndolos a disminuir su eficacia, ya en tiempo de paz como en tiempo de guerra. Es a eso también y no a la continuación de un determinado partido en el gobierno a lo que la reforma apunta.

No quiero, señor presidente, seguir el análisis un tanto exhaustivo de cada una de las disposiciones y voy a prescindir de juzgar aquéllas en que nuestro texto no se aparta de la sanción de Diputados, puesto que esa sanción ha sido aceptada por el dictamen de la minoría y combatir contra esos textos o apoyarlos sería como luchar contra molinos de viento, puesto que no tendría adversarios a mi frente.

Me voy a ocupar del artículo 79 porque es necesario aclarar el sentido que damos a la disposición de un segundo párrafo del artículo 261, que es del siguiente tenor: «Será reprimido con la misma pena el funcionario que empleare en provecho propio o de un tercero trabajos o servicios pagados por una administración pública.» Creo necesario ocuparme de este asunto porque es un tanto confusa la explicación que del mismo se dio en la Cámara de Diputados, y podría ser peligrosa para su interpretación judicial.

—Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente 1º del Honorable Senado, don Angel R. Freytes.

Este inciso ha sido tomado del artículo 354 del proyecto de 1960 y así figura en el artículo 16 del decreto ley 4.778, cuya derogación propugnamos. Tiene su fuente mediata en el artículo 314 del Código Penal italiano. No reprime el mal uso o abuso que los funcionarios pueden hacer de las cosas que se les confían en razón de sus cargos. Es ajeno a la norma proyectada el peculado de uso, que queda sometido a las reglas disciplinarias del orden

administrativo. Se trata de la utilización indebida de tareas personales, sea que consistan en la prestación de servicios o de una obra. Daremos como ejemplo la utilización de obreros del Estado para realizar reparaciones en el domicilio particular del funcionario o la utilización de los servicios de un médico pagado por la administración pública, para prestar servicios públicos, si se le pide una atención privada.

Y llegamos, señor presidente, a lo que es sustancial en nuestro dictamen: al enriquecimiento ilícito de los funcionarios. Volvemos a insistir en esta figura delictiva por razones de moral administrativa y para el restablecimiento de la confianza pública. Creemos que se ha hecho mal, habiéndose entrado en el camino de la reforma no incorporando este texto. Veamos el hecho. Los funcionarios se enriquecen; lo hacen por medios sutiles que no dejan rastros; luego, con el tiempo, ostentan riquezas de origen desconocido; no pueden ser perseguidos porque es imposible la prueba del hecho torpe. Hasta desafían la investigación, la reclaman estentóreamente, porque saben que han cometido tan sutilmente su delito que no han de ser descubiertos, e invocarán el sobreseimiento por falta de prueba, como la prueba de la inocencia. En realidad, señor presidente, no tienen el coraje del ladrón o del asaltante que exponen la vida; entran con la ganzúa sutil de todas las argucias y no dejan rastros de su mal comportamiento.

Desde que se empezaron a enturbiar las aguas políticas argentinas, surgió la preocupación por este delito. Es así como tenemos en el año 1936, el proyecto Corominas Segura; en 1938, el proyecto Cisneros en la Cámara de Diputados y en ese mismo año, en el Senado, el proyecto Landaburu; en 1940, el proyecto Ruggieri; en 1938, una sanción del Senado, que fracasa en Diputados. En 1938, en 1939 y en 1940, despachos de la Comisión de Legislación General de la Cámara de Diputados; en 1941 un nuevo proyecto de Landaburu; en ese mismo año otro despacho de la Comisión de Legislación General de la Cámara de Diputados. Resulta monótona la cita, señor presidente, pero para que se comprenda por qué no podíamos declinar de incorporarla en este despacho, tenemos que evidenciar a través de estos sucesivos proyectos que ésta es una iniciativa que está siempre presente, pero que pareciera destinada a no sancionarse nunca.

En el proyecto Peco del año 1941 se configura también este delito, artículos 323 y 324. En el año 1948, el diputado Nerio Rojas presenta un proyecto de enriquecimiento ilícito; en 1960, lo reitera. En 1949, presenta análoga iniciativa el diputado Absalón Rojas. El actual vicepresidente de la República, doctor Perette, cuando era diputado nacional, presentó tres iniciativas: una en 1958, otra en 1959 y una tercera

en 1960. ¿Será por fin ésta la oportunidad en que nuestra iniciativa no termine en proyecto, para incorporarse en forma definitiva al ordenamiento jurídico argentino? Incito a los señores senadores de todos los sectores: démosle esta prenda de confianza a la opinión pública, para que de hoy en más, el que después de haber pasado por la función pública posea una riqueza que no pueda justificar, tenga abiertas las puertas de la cárcel.

¿Por qué falló en Diputados? Por el argumento de que introduce en materia penal la inversión de la prueba. Y es posible que vuelva a repetirse el argumento. Se dijo también que se quiere una ley orgánica como la proyectada por el doctor Palacios. En cuanto a esto último, yo diría que dentro de un buen método jurídico la parte punitiva tiene que estar en el Código Penal y debe haber una ley en el orden administrativo que establezca los debidos resguardos para la publicidad de la fortuna de los ciudadanos cuando entran a la función pública —ley meramente administrativa—, pero sobre la base de establecer un ordenamiento único, no separemos la materia penal del Código Penal.

La inversión de la prueba no es una novedad. Figura en casi todos los antecedentes. En el despacho de la Comisión de Legislación General, orden del día 99-S del año 1938, el artículo 1º tipificaba el enriquecimiento ilícito; el artículo 2º enumeraba las fuentes de enriquecimiento lícito y decía: «Cualquier enriquecimiento que no se produzca por estas vías, es ilícito», y luego el artículo 3º estatúa: «La prueba de que el enriquecimiento proviene de las causas mencionadas en el artículo anterior (es decir de las lícitas) incumbe al funcionario o empleado.» O sea, al funcionario se le demuestra que se ha enriquecido luego de ejercida la función pública y a él le incumbe la prueba de que se había enriquecido por un medio lícito.

En el proyecto Peco, en el artículo 324, también se establece este principio de la inversión de la prueba: «Salvo prueba en contrario, se presume enriquecimiento ilícito todo aumento apreciable del patrimonio que no proveniere de las siguientes causas...», y se enumeran.

En el proyecto Soler, artículo 346, inciso d), que es la fuente de nuestra disposición, también está determinada la inversión de la prueba: «Será reprimida con prisión de seis meses a dos años y multa de treinta a cien días al funcionario público que sin incurrir en un delito más severamente penado, no justificare al ser debidamente requerido, la procedencia de un incremento considerable de su patrimonio posterior a la asunción de un cargo público.»

Como ésta es la fuente del texto que proyectamos, conviene leer la fundamentación que le da el doctor Sebastián Soler: «La corrupción, la concusión, el peculado, las negociaciones in-

compatibles, son delitos ejecutados ordinariamente de modo subrepticio y astuto, sirviéndose su autor de personas interpuestas y de simulaciones. Así resulta que la dificultad de esa prueba concretamente referida a un hecho, viene a determinar absoluciones que podríamos llamar escandalosas, porque benefician a sujetos cuyo estado de fortuna ha cambiado ostensiblemente en el curso de pocos años de desempeño de una función pública, sin que sea fácil señalar la procedencia ilícita de los bienes. Para salvar esa dificultad se ha dicho que lo más expeditivo consiste en crear una figura fundada en la presunción de ilicitud del enriquecimiento contra el que no prueba la corrección del incremento patrimonial. En líneas de principios se verá que disiento; esa fundamentación no es simpática en derecho penal, pero toda vez que es innegable la existencia de esa dificultad, parece prudente ver si sobre la base de otros principios menos dudosos es posible alcanzar un resultado prácticamente satisfactorio. En primer lugar, debe observarse que el escándalo efectivamente derivado tanto de esas absoluciones fundadas en la falta de prueba de la conexión entre una situación patrimonial y un hecho determinado deriva de que la absolución se pronuncia aun cuando existe la evidencia de un efectivo enriquecimiento, es decir, que la sola circunstancia de cambio no aclarado de fortuna de los funcionarios públicos, constituye en sí mismo un grave mal ejemplo en esta República, porque la gente, guiada por puro sentido común, sospecha de la coincidencia temporal entre el enriquecimiento y el desempeño de una función, especialmente si el hecho pasa en silencio, sin explicación alguna. Sobre esta base, pues, no parece del todo exacto hablar de presunción, porque este procedimiento jurídico y la consecuente inversión de la prueba, resultan inaceptables en derecho penal porque crean el peligro de la condena a un inocente, a un sujeto no realmente culpable. En este caso, en cambio, frente a un enriquecimiento efectivo, no presunto, ocurre cuando media flagrancia, que los hechos acusan, y quien ha de explicarlos, para librarse de la evidencia derivada de esa prueba real, debe ser el reo.

»Pero hay otra consideración más simple aún, que permite resolver el problema en una forma nada excepcional o presuntiva. Ya en otros casos hemos señalado la necesidad de subrayar la existencia positiva de deberes; son muchas las figuras en cuya base se encuentra una exigencia positiva; en los delitos de comisión por omisión, ésa es también la regla. Pues bien: no hay nada desmedido, irregular o excesivamente severo en imponer a los funciones un deber semejante al que recae sobre un administrador común, al cual se le exige, bajo amenaza penal, una rendición de cuentas con la cuidadosa separación de los bienes del administrado. Pues bien: la asunción de un cargo público comporta un deber semejante, un deber de especial pulcritud y claridad en la situación patrimonial.



Quien sienta esa obligación como demasiado pesada o incómoda, que se aparte de la función pública.»

Es decir que, en definitiva, admite la inversión de la prueba. Es que se trata, señor presidente, de un delito que, según la calificación de Mancini, corresponde a los delitos de sospecha, que no son nuevos en el ordenamiento penal ni es una figura delictiva desconocida en nuestro derecho positivo. En realidad, no es nunca cierto, ni aun en materia penal, que toda la carga de la prueba pesa sobre la parte acusadora. Lo demuestran todos los códigos procesales que autorizan al imputado a ofrecer prueba. Generalmente basta el concurso de ciertas probanzas para admitir la culpabilidad, aun cuando se compongan de meras presunciones. Sea el ejemplo de un homicidio. Probado el cuerpo del delito, puede ser condenada una persona que tuvo motivos para matar, que estuvo en el lugar del hecho y en cuyo poder se encontró el arma. Sin embargo, será exculpado si prueba que en el momento de ocurrir el hecho se encontraba en un lugar distante y que el arma pudo ser maliciosamente introducida entre sus pertenencias, etcétera. Es decir, frente a las presunciones que acumula la acusación es posible contraponer por la prueba que produce el reo, otras presunciones que lo exculpen. No de otra manera se configura la prueba en el caso que estamos considerando. No se introduce, por cierto, señor presidente, un nuevo juicio de residencia. Como todo otro delito, llegará a conocimiento del juez por denuncia o querrela sometida a las normas propias de cada ordenamiento procesal. La prevención se orientará a: primero, la prueba de que el imputado ha sido funcionario público, y segundo, la prueba de que con posterioridad se ha enriquecido en su patrimonio. La concurrencia de estas dos pruebas crea una sospecha. Será, entonces, cuando se lo llamará para justificar su enriquecimiento, no como procesado, pues recién habráse configurado el delito con la falta de justificación del enriquecimiento.

Pero aquí cabe considerar una situación jurídica que hasta ahora no ha sido tratada y que se incorpora por primera vez en un dictamen.

Cuando yo analizaba, señor presidente, las razones que se daban para no aceptar la figura delictiva, vinculadas con la inversión de la prueba, me parecieron insatisfactorias. Pero se presentó en mi mente otra circunstancia que no fue contemplada en el curso de las impugnaciones que se formularon. Podría darse el caso de que el imputado afirmara que no puede decir la fuente de su enriquecimiento y probarlo sin confesar un origen inmoral o aun delictivo extraño a la función administrativa o pública desempeñada. Es decir, supongamos el caso de una dama agraciada con un cargo en la administración pública, que tiene relaciones ilícitas o inmorales y de las cuales obtiene un enri-

quecimiento. Podría decir esta dama que para justificar que no se ha enriquecido en el desempeño de la función pública, se le obliga a exhibir su vida privada y que, en consecuencia, se está violando el artículo 18 de la Constitución Nacional, que garantiza a las personas el derecho de no declarar contra sí mismas, y tendría razón. Si lo que se declarara fuera la confesión de otro delito, se le habría obligado a declarar contra sí misma. Por eso aparece una innovación en el texto del proyecto, con respecto a que la prueba que el imputado ofrezca de su enriquecimiento se conservará secreta a su pedido y no podrá ser invocada contra él para ningún otro efecto. En el dictamen —lo voy a observar en su oportunidad— falta la palabra «otro». Es decir que mediante esta disposición permitimos la prueba para demostrar que el enriquecimiento no ha derivado de la función pública, pero no la convertimos en un arma que se pueda esgrimir contra quien para liberarse de una imputación de mal funcionario, tuviera que exhibir alguna parte de su vida privada que debe permanecer en el secreto profundo del expediente y que no se podrá explotar contra él.

Dije que este delito de sospecha no es desconocido en nuestro ordenamiento jurídico y me llama la atención que no se haya advertido esta circunstancia en el debate que ha tenido lugar en la Honorable Cámara. Ya el delito de sospecha aparece perfectamente justificado e incorporado a nuestro derecho en la ley de aduanas, artículo 198, y ha merecido un voto de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en que ha declarado constitucional la inversión de la prueba, que no voy a leer porque mi exposición se ha alargado considerablemente, de fecha 21 de noviembre de 1962 y que puede consultarse en el volumen 254 de su colección de «Fallos», en los autos «Bilsky Mauricio, sobre contrabando», es decir que cuando se encuentra en poder de un particular una mercadería que puede ser el resultado de un contrabando, el particular va a tener que justificar cómo obtuvo lícitamente la tenencia de esa mercadería. Y la Cámara Nacional en lo Penal Económico, en criteriosas sentencias, una de ellas de fecha 15 de octubre del corriente año, amparándose en el fallo de la Corte Suprema de Justicia, también ha sentado el mismo principio, o sea que dentro del ordenamiento positivo argentino está admitida la inversión de la prueba en los delitos de carácter económico.

No quiero extenderme en mayores consideraciones. Tal vez en el curso del debate en particular tenga ocasión de esclarecer algún punto dudoso. Quiero destacar que no hemos aprovechado esta oportunidad para intentar un avance frontal en materia de política penal. Ya con mayor tranquilidad enfrentaremos la reforma total del Código Penal en su método, en su estructura, en su contenido. Pero en este



momento de reencuentro nacional hemos querido hacer coincidir la supresión de los delitos de opinión del ordenamiento jurídico con la sanción de las reglas de pureza administrativa que nos hagan mirar con confianza hacia el futuro. Nosotros necesitamos el enfrentamiento y el choque pacífico de todas las ideas en un clima de paz y de orden social, pero al mismo tiempo de moral administrativa. Poca confianza pondrá el pueblo en sus mandatarios si apenas traspuesta la puerta por la que el mandatario se retira de la función pública, ya comienza a exhibir una fortuna que no tuvo antes de ocupar los cargos ni ocasión de ganar durante el desempeño de éstos.

En consecuencia, nuestro despacho tiene el signo de la libertad de opinión y de la moral administrativa. (*Aplausos.*)

**Sr. Presidente (Freytes).** — Tiene la palabra el señor miembro informante de la minoría de la comisión.

**Sr. Flores.** — El proyecto aprobado por la Cámara de Diputados contiene disposiciones de dos tipos o categorías: por las de la primera, se deroga una legislación represiva anómala, restableciendo la vigencia de disposiciones anteriores a aquélla; y por las de la segunda categoría, se introducen reformas a reglas penales sancionadas normalmente por el Congreso. Trata entonces en la misma sanción la Cámara de Diputados cuestiones de dos tipos muy distintos; aunque con cierta relación por vincularse a aspectos de la legislación penal, son diferentes por los problemas que involucran, por los principios fundamentales en que se basan, por su grado de urgencia, y por las distintas exigencias que imponen su tratamiento y su acertada solución legislativa.

Las cuestiones del primer tipo —la derogación de las leyes represivas— importan problemas de normalización institucional y de pacificación del país; están enderezadas a la plena vigencia de principios constitucionales que habían sido violados y revisten un acentuado carácter de urgencia, tanto por los reclamos de la opinión pública como por las situaciones injustas para derechos ciudadanos que determina su aplicación, así como por la incertidumbre perjudicial que surge de las dudas y resoluciones a veces contradictorias de los jueces sobre su vigencia o caducidad. Los asuntos vinculados a la derogación de las leyes represivas exigen, pues, rápido tratamiento.

El aspecto señalado acerca de la situación injusta creada a muchos ciudadanos no constituye una mera posibilidad: es una realidad perfectamente comprobable, ya que hay ciudadanos procesados en virtud de estas normas anómalas. En la Capital Federal existen procesados por aplicación del decreto ley 4.161/56; en el Juzgado Nacional de Instrucción a cargo del doctor Jorge Moras Mom, un proceso con 24 inculpa-

dos; hay otro procesado ante el Juzgado de Instrucción del doctor Jorge B. Quiroga; otro en el Juzgado de Instrucción N° 10 de esta Capital; y hay otros procesos sustanciados en distintas partes del país, en que se aplican los decretos leyes 788/63 y 4.214/63, con una cantidad de ciudadanos inculcados en ellos. Es decir que existe una realidad que demuestra la urgencia de derogar las normas represivas anómalas.

En cambio, el segundo orden de cuestiones tratadas por Diputados, a saber, la modificación de la ley penal común, no involucra problemas de normalización y pacificación del país, no está reclamado por exigencias constitucionales; están impulsadas por un simple propósito de mejoramiento de normas penales corrientes, normales. No tienen, entonces, carácter de urgencia, no reclaman una rápida resolución; por el contrario, exigen más bien un estudio reposado y sin apresuramiento.

Dentro de una buena técnica legislativa, pensamos que hubiera sido aconsejable que ahora se tratara y resolviera únicamente el asunto urgente, el tema que reclama una rápida solución, el verdadero problema fundamental que el Congreso tiene que resolver, vale decir, la derogación de la legislación represiva anómala, con la consiguiente normalización de toda la legislación penal del país, tan importante para el debido cumplimiento y respeto de las libertades individuales, dejando entonces para otra ley las reformas al Código Penal.

**Sr. Gadano.** — ¿Me permite una breve interrupción, señor senador?

**Sr. Flores.** — Sí, señor senador.

**Sr. Gadano.** — ¿Usted no cree que es urgente, urgentísimo diría yo, instrumentar lo necesario para terminar con los ladrones públicos en este país?

**Sr. Flores.** — Sí, señor.

**Sr. Gadano.** — Siempre hemos tenido el problema de la prueba por el que se han escapado los hábiles ladrones del país, y nosotros estamos dando un instrumento que posibilitará su sanción. Nosotros creemos que esto es urgente, señor senador, en la misma forma que comprendemos la urgencia de que nos ocupemos de esa legislación represiva, que no nos pertenece pero que vamos a derogar.

**Sr. Flores.** — A mi juicio tiene una finalidad perfectamente útil y necesaria, hasta con ciertos caracteres de urgencia, pero indudablemente distinta de esta derivada de la existencia de normas penales evidentemente anómalas, por haber sido sancionadas por un Poder Ejecutivo sin aprobación del Congreso y estar afectando las libertades ciudadanas. Vale decir que, a mi juicio, hay un carácter de urgencia mucho más acentuado.

**Sr. Gadano.** — Es una opinión personal del señor senador.

**Sr. Presidente (Freytes).** — Si me permiten los señores senadores, les ruego dirigirse a la Presidencia cuando soliciten una interrupción y más aún les pido que se mantenga ante la

exposición del señor senador Flores el mismo tono de tranquilidad que se observó durante la del miembro informante de la mayoría.

**Sr. Gadano.** — Desde ya, señor presidente, que mi interrupción ha sido hecha con toda tranquilidad y respeto.

**Sr. Snopek.** — Voy a hacer moción de orden en el sentido de que no se interrumpa al orador sin su consentimiento previo, como lo dispone el reglamento.

**Sr. Flores.** — En este caso yo había consentido la interrupción.

**Sr. Presidente (Freytes).** — Aclaro al señor senador Snopek que la Presidencia ya ha hecho la observación pertinente. Continúa en el uso de la palabra el señor senador Flores.

**Sr. Flores.** — También quiero decirle al señor senador que luego, al ocuparme más especialmente del tema relacionado con el enriquecimiento ilícito, voy a dar otras razones por las cuales entiendo inconveniente la forma en que proyecta la mayoría la represión de ese delito.

Vale decir que pienso que las reformas del Código Penal que no tienen un carácter tan evidente de urgencia, y con respecto a las cuales no existe un reclamo notoriamente manifiesto y acentuado de la opinión pública actual, deberían hacerse después de un amplio y meditado estudio. En cambio, como decía, la derogación de la legislación represiva anómala sí tiene carácter de urgente. Hay reclamos virtualmente unánimes de la ciudadanía para que ella se derogue, así como la posición asumida por prácticamente todos los partidos argentinos de alguna significación, en el mismo sentido. Quiere decir que tanto las características de esa legislación como los reclamos de la opinión pública estarían indicando que se trata de un problema urgente que requiere una solución rápida y sin demoras. La Cámara de Diputados ha adoptado otro criterio, incluyendo en una misma sanción las dos cuestiones, vale decir, la derogación de la legislación represiva y las reformas parciales al Código Penal. Ante esa circunstancia, y dado que el problema fundamental y urgente a solucionar es la derogación de la represión anómala, es que nos hemos inclinado en el despacho de minoría a aceptar la sanción de Diputados, subordinando así a la solución de ese problema fundamental y urgente a que me refería, los conceptos teóricos sobre lo que sería lo más aconsejable en una buena técnica legislativa.

Hemos tenido presente para llegar a esa conclusión, que la sanción de Diputados es acertada en cuanto a la solución del problema fundamental: el de la derogación. En cuanto al aspecto de las reformas parciales al Código Penal es, en general, correcto, aunque en su ordenamiento algunos puntos pudieran suscitar observaciones. Es aceptable, sobre todo, porque no contiene normas penales que por su concepto o forma pudieran provocar en su aplicación pe-

ligros para las libertades y derechos individuales. Las nuevas figuras que introduce la Cámara de Diputados prevén adecuadamente la represión de hechos bien calificados como delitos: los actos de lucha o segregación racial, el ultraje a los símbolos nacionales, ciertos delitos propios de los funcionarios públicos, el libramiento de cheques sin fondo, vale decir, normas justas en su fondo y no peligrosas en su aplicación. Además, dichas normas no han merecido, en lo substancial, observaciones por parte de los técnicos que han emitido su opinión, y tampoco de los distintos sectores políticos que participaron en el debate de Diputados.

Quiere decir que, en cuanto a la derogación de la legislación represiva anómala, la sanción de Diputados es, indudablemente, justa y oportuna. Hay un criterio unánime en todo el país: virtualmente, todos los ciudadanos que contemplan con ecuanimidad y altura los problemas argentinos piensan que esa legislación debe ser derogada. Los decretos leyes represivos son irregulares en su origen al haber establecido sanciones penales sin ley del Congreso; son violatorios de un normal régimen constitucional y republicano al prohibir y penar la mera expresión de sus ideas y simpatías a una gran cantidad —muchos miles— de ciudadanos argentinos; son notoriamente injustos al establecer un sistema discriminatorio en perjuicio de amplios sectores de la ciudadanía, a veces hasta por el simple hecho de entonar una canción o pronunciar algún nombre, y, además, evidentemente en este momento son inconvenientes e inoportunos porque representan un grave obstáculo para el anhelo general de pacificación y entendimiento de todos los argentinos, dentro de un régimen de auténtica vigencia republicana y constitucional.

Considero, entonces, que la derogación de esos decretos leyes es una verdadera necesidad nacional, y ha sido contemplada con acierto por la sanción de la Cámara de Diputados.

El despacho de la mayoría coincide en ese aspecto con el proyecto de Diputados, pero no hemos podido adherir al mismo porque introduce cambios que demorarían la solución del problema fundamental: la derogación. Además, esos cambios, a nuestro juicio, no mejoran la sanción de Diputados; por el contrario, son inconvenientes en sus aspectos de fondo, referentes a las normas y previsiones nuevas. Dejo de lado circunstancias relacionadas con el mero ordenamiento o algún cambio de detalle que introduce la mayoría en determinadas disposiciones del proyecto de la otra Cámara, tal vez mejorándolas desde ese punto de vista, aunque conserva lo sustancial de las mismas. Vale decir, entonces, que nuestra discrepancia en este punto está fundada esencialmente en que con nuevas figuras, con nuevos textos para configurar hechos reprimidos como delitos, no se mejora la sanción de Diputados, sino que se introducen

disposiciones que nos parecen inconvenientes y aun peligrosas.

Las nuevas normas, las nuevas figuras, introducidas en el despacho de la mayoría están consignadas en dos artículos principalmente: el nuevo artículo 213 bis, con sus cuatro apartados, y el nuevo artículo 268/2.

En cuanto al nuevo artículo 213 bis, introduce esa figura, desechada en Diputados, de la participación en agrupaciones permanentes o eventuales, no comprendidas en el artículo 210, que tuvieren por objeto imponer ideas o combatir las ajenas por la fuerza o el temor. Pensamos que es una disposición peligrosa al ser excesivamente amplia, porque sin dudar en ningún momento de que el propósito de la mayoría no ha sido en forma alguna el de reprimir la mera opinión o actividades lícitas o correctas, su texto se presta fácilmente a que en él se pueda comprender a una agrupación con actividades lícitas. Porque una de dos: estas imposiciones de ideas y la de combatir las ajenas por la fuerza o el temor constituyen algún hecho delictuoso reprimido expresamente en otras disposiciones del Código Penal, y entonces queda comprendido ya en las normas vigentes del artículo 210, o si no constituye —esa violencia o temor— un hecho reprimido ya como delito, entonces se está previendo una violencia o temor que en sí no son delictuosos.

Con la sanción de este artículo pueden caer entonces con facilidad partidos, instituciones lícitas, y aun grupos de asociados de algún partido o entidad que con propósitos de defensa, ante la posibilidad de un simple ataque a sus locales, disponga que se los defenderá, vale decir, que usará de la fuerza para defenderse o tratará de inspirar temor para no ser atacado, y podría caer entonces en la sanción de este artículo. Es decir que resulta peligrosa la disposición y aun, hasta cierto punto, ilógica en su sanción, porque impone una penalidad superior a la del artículo 238, por ejemplo, que reprime la actividad directa de violencia a mano armada contra la autoridad.

El segundo apartado del artículo 213 bis incrimina a los que participaren en organizaciones o realizaren propaganda que tenga por objeto la justificación o promoción de la discriminación racial en cualquier forma. Esto, en realidad, viene a ser la represión de opiniones por la simple expresión de las mismas aunque no haya actos concretos de discriminación, ni incitación, ni realización de actos discriminatorios en perjuicio de una minoría.

—Ocupa la Presidencia el señor presidente del Honorable Senado, doctor Carlos H. Perette.

**Sr. Flores.** — Se reprime la participación en organizaciones que traten de justificar, aun doctrinariamente, una diferenciación racial.

Opiniones de este tipo, a nuestro juicio, son inconvenientes, pueden ser perjudiciales; pero la forma de combatirlos es con la expresión de las opiniones o razonamientos contrarios y no por la represión penal. Quiere decir que quedaría reprimida aun la simple opinión que trate de justificar una discriminación basada en el distinto origen racial, aunque fuera por motivos puramente doctrinarios, teóricos, sin incurrir en actos que directamente vayan a producir una segregación, lo cual es el propósito de las disposiciones represivas en esta materia que tienden a combatir la discriminación racial.

El apartado 3º establece: «Los que inciten a la violencia o realizaren actos de violencia, sea individualmente o integrando organizaciones contra cualquier raza o grupo de personas.»

Pensamos que la previsión sobre estos actos de discriminación racial está mejor contemplada en la sanción de Diputados. El elemento típico, la finalidad de lucha o discriminación por motivos raciales está más claramente sentada en la sanción de Diputados. Según el texto de la mayoría, quedarían comprendidas violencias contra personas de otro color o raza aunque no se debieran a motivos raciales, para lo cual evidentemente no habría razón en establecer una disposición especial, sino exclusivamente atenerse a las disposiciones corrientes que protegen a todos los ciudadanos del país contra la violencia.

Además, nos parece observar que en estos textos del proyectado artículo 213 bis, que se refiere a la discriminación racial, no está efectivamente contemplado el acto directo de discriminación cometido sin violencia, sin incitación a la misma o sin participación en organizaciones de propaganda: el acto de un funcionario que resuelve impedir a las personas de determinada raza su ingreso en una oficina pública, la resolución que establezca que a determinados paseos públicos no podrán concurrir personas de otras razas, no están netamente comprendidos en esta sanción propiciada por la mayoría y en cambio están perfectamente aclaradas en la sanción de Diputados: «El que públicamente instigare o ejecutar actos que provoquen la segregación...» Allí está mejor contemplado el acto típico, el más grave de la discriminación racial: la imposición de una segregación fundada en motivos raciales.

Por otra parte, señor presidente, existen serias dudas de parte de los más autorizados penalistas del país sobre la conveniencia de introducir este tipo de sanciones contra la discriminación racial, que no se refieren directamente a los actos mismos que determinan dicha discriminación, sino exclusivamente a la propaganda que pretende justificar teóricamente las razones que puedan existir para establecer diferencias entre personas de distinto origen.

El profesor Jiménez de Asúa, en la reunión realizada el 17 de junio en la Comisión de Le-

gislación Penal de la Cámara de Diputados, refiriéndose a las disposiciones relacionadas con la discriminación racial, afirmó que es un problema bastante grave y señaló que un simple discurso que incite a la lucha de clases quedaría incluido en este artículo. Razones como las que da el profesor Jiménez de Asúa son las que nos hacen pensar en la peligrosidad de una disposición tan amplia que no se limita al acto concreto y activo que provoca la discriminación.

A su vez el doctor Soler, en su exposición ante la misma comisión, destacaba lo difícil que es hacer una definición clara de esta infracción: «Este es el problema que se ha planteado, afirma, en los límites a los cuales se puede llevar la legislación penal en materia de defensa de la democracia.» Se está refiriendo al problema de la discriminación racial.

Por esas razones, señor presidente, pensamos que no se puede ir demasiado lejos en esta materia; que hay que atenerse a las disposiciones que combaten el acto directo que procura segregar a personas de otras razas o religiones, evitando aquellas sanciones relacionadas con la propaganda o la simple exposición de ideas, aunque sea en forma pública. Es decir, que en este sentido el proyecto de Diputados nos parece más adecuado y menos peligroso.

Con respecto al apartado cuarto, pensamos que no producirá efectos útiles su sanción. Si los hechos a los que se trata de instigar constituyen ya un delito, es decir, se instiga a la rebelión, a la sedición, a la resistencia a la autoridad, ya entonces estarán comprendidos, a mi juicio, en el artículo 209 del Código Penal vigente, que legisla sobre la instigación para cometer determinado delito.

No sería necesario entonces introducir una nueva disposición penal, ya que si se trata de delitos realmente peligrosos para el orden público, se encuentra ya contenida la adecuada previsión en el Código Penal. Y si no fueran delitos, sino simples opiniones que se emiten respecto a actitudes que pueda tener cualquier institución del Estado, no parece justificado para aquéllas el introducir nuevas disposiciones.

En conjunto, entonces, las modificaciones del despacho de la mayoría a este artículo 203 bis de la sanción de la Cámara de Diputados, nos parecen en general inconvenientes por reprimir delitos de opinión, o por ser peligrosas al existir una posibilidad seria de que se comprenda en esta represión actividades lícitas, o por referirse a hechos ya previstos por el Código Penal.

Me ocuparé ahora del artículo 268<sup>2</sup> que contiene el despacho de la mayoría relacionado con el enriquecimiento patrimonial. La finalidad es indudablemente plausible. No podemos todos sino estar de acuerdo en que debe reprimirse la actividad delictuosa y deshonesta de un empleado o funcionario público que se enriquece en el ejercicio de sus funciones. Pero pensamos que el texto proyectado es peligroso por su imprecisión y excesiva amplitud

Se dispone aquí la previsión y sanción de un nuevo delito, hecho que no ha sido previsto en ninguna disposición penal anterior que haya regido en el país y ni aun en el extranjero. Vale decir que es una reforma total, algo completamente nuevo lo que se introduce por la vía de este agregado parcial a un proyecto de ley que trata otro tema fundamental, cual es el de la derogación de los decretos leyes represivos. Pensamos que esto es materia más apropiada para una sanción legal exclusivamente destinada al mejoramiento de nuestras normas penales; mejor aún si fuera la reforma integral del código, o por lo menos mediante un proyecto aparte con sanción respectiva, que permitiera el estudio más completo y más meditado sobre la forma de reprimir este enriquecimiento presumido exclusivamente a través de un aumento patrimonial.

Es perfectamente justo sancionar al mal funcionario que se enriquece pero en cambio sería evidentemente injusto y no puede estar en el ánimo de nadie sancionar al funcionario inocente, someterlo a sospechas, introduciendo una disposición de este tipo, sin que existan motivos graves y serios para pensar que haya habido una actividad ilícita que origine el enriquecimiento. Soy un convencido de que la mayoría de los funcionarios son honestos y que no se enriquecen con la función pública. No es conveniente, por lo tanto, facilitar que se los moleste con procesos y cargos de la prueba, sin un grave, serio y fundado motivo de sospecha.

A nuestro juicio, el texto proyectado no cumple esos requisitos; no tipifica correctamente el hecho delictuoso y no enfoca la ley sobre lo realmente censurable —el enriquecimiento—, sino sobre un aspecto formal, la inobediencia a un requerimiento.

Trataré de sintetizar los defectos que encontramos en el dictamen de la mayoría sobre el artículo 268<sup>2</sup>.

Por una parte, comprende por tiempo indefinido al que es o ha sido funcionario, porque de acuerdo con la forma como se inicia el artículo, «el que debidamente requerido» no justificaré un enriquecimiento «posterior a la asunción de un cargo», significará que ese funcionario, durante el ejercicio del cargo, o uno o diez años o cualquier número de años después de haber dejado el cargo, seguirá sometido a sospecha y con la posibilidad de un procesamiento. Entiendo que no enfoca como elemento esencial lo realmente ilegítimo, lo substancialmente censurable, que es el enriquecimiento. El requerimiento debería ser un requisito previo a la acción, para garantía del imputado de que sus explicaciones sobre el origen de su incremento patrimonial, sobre los comprobantes que posea, serán conocidos por la autoridad. No aparece el requerimiento en el despacho de la mayoría como un elemento central de la figura delictiva, lo que produce el efecto de que ni la prescripción podrá correr hasta que no se haya efec-

tuado aquél, lo que, como decía, puede ocurrir muchos años después de haber cesado en la función pública.

Dice después el artículo: «el que al ser debidamente requerido». Nos parece imprecisa la forma. ¿Por quién será requerido?

**Sr. Fassi.** — Por el juez instructor.

**Sr. Flores.** — No lo dice el artículo.

**Sr. Fassi.** — ¿Y quién va a ser el que requiera a una persona si el delito he dicho que se configura con la falta de justificación de que la fortuna fue bien habida? Yo he explicado el procedimiento, señor senador, y he dicho cómo se va a operar.

**Sr. Flores.** — Esa es la opinión del señor senador, perfectamente respetable, lo cual quiere decir que ha estado en el espíritu de la comisión la significación de las palabras «débidamente requerido». Pero quien vaya a aplicar este texto tiene que ajustarse al texto de las disposiciones, y entonces «débidamente requerido» no aparece suficientemente precisado de por quién lo será. Normalmente, cuando los delitos llegan al juez, llegan con todos los elementos reunidos. El juez no hace más que comprobarlos, ya que normalmente no influye para completar la figura delictiva con el cumplimiento de algunos requisitos. Lo que quiere decir que el «débidamente» se presta a esa fundada duda.

La palabra «justificar» que usa el despacho de la mayoría, tiene dos acepciones distintas, en el sentido de que puede ser simplemente probar o acreditar un hecho, o, si no, demostrar su legitimidad o justicia. Creemos debe estar más preciso, para que no quepa duda sobre cuál es el sentido.

Sin embargo, el defecto fundamental que encontramos al texto del proyecto, es en cuanto a lo que, a nuestro juicio, es el elemento más importante del delito: el enriquecimiento. Porque podrán observar los señores senadores que, de acuerdo con ese texto, basta un simple aumento patrimonial, porque la palabra enriquecimiento ha sido empleada en el sentido de un incremento, de un aumento, acrecentamiento. Basta un simple acrecentamiento, aunque sea mínimo, ocurrido durante la función pública o muchos años después, antes de ser requerido, para que ya el funcionario caiga bajo sospecha. Nos parece que no es posible que se considere sospechoso cualquier aumento por parte de quien desempeña o ha desempeñado una función pública durante largos años. Esto no responde a la realidad. Nadie considera sospechosa la simple circunstancia de que algún funcionario o ex funcionario haya tenido un pequeño aumento patrimonial. Al emplearse la palabra enriquecimiento sin ninguna calificación que determine su significado y cuál es el carácter del aumento o incremento a que hace referencia, se está declarando sospechoso y susceptible de ser sometido a proceso, a aquel funcionario que,

aunque por motivos legítimos, haya obtenido ese aumento.

Para que se establezca una presunción como la que surge de este artículo, pensamos que debe haber motivos más serios para creer que el enriquecimiento patrimonial del funcionario es ilícito. Tendríamos que coincidir con lo que la opinión pública señala como sospechoso o censurable. Y eso se refiere al aumento considerable que es obtenido por quien no dispone de recursos lícitos y públicamente conocidos que expliquen ese enriquecimiento. Para mi modo de ver, es indispensable que la disposición legal que reprima este tipo de enriquecimiento, califique cuál es el aumento patrimonial que debe ser censurado y motivar sospechas. No puede ser cualquier aumento, porque de lo contrario sería ir muy lejos del propósito que debe inspirar esta sanción y apartarse de lo justo y razonable. Las presunciones en materia legal se establecen en base a lo que ocurre normalmente, a lo que acontece en la mayoría de los casos, y entonces la ley se ajusta a esa anomalía para considerar presumido determinado hecho o para que se deba probar la circunstancia opuesta.

Pienso que este aspecto que resalto merece la reflexión atenta de los señores senadores respecto a que no es suficiente que se produzca un mero aumento patrimonial, aun mínimo, ya que el mismo quedaría comprendido en la sanción tal como se pretende establecer. Lo sospechoso, lo generalmente deshonesto, es el aumento patrimonial de funcionarios que alcanza cierta magnitud y desproporcionado con los recursos conocidos. La disposición legal debe prever expresamente tales circunstancias calificativas y que de darse, permitan exigirle la prueba de que ese aumento es lícito, lo cual no se le requiere cuando no existe un motivo serio y grave para pensar que se está frente a una situación digna de sospecha.

Coincidiría con la tesis del señor miembro informante de la mayoría en el sentido de que se exija la prueba en determinadas circunstancias, siempre que el hecho sospechoso, censurable, hubiera ya sido considerado delictuoso por la ley. El mero enriquecimiento, el aumento patrimonial en cantidad pequeña, proporcionado a los recursos públicamente conocidos del funcionario o ex funcionario, no es causa suficiente para originar la sospecha y la exigencia de la prueba de descargo.

Se ha configurado con este texto un delito formal, otorgando una significación importantísima a lo que sólo sería el mero incumplimiento de una formalidad; por el incumplimiento de una disposición de forma, se consideraría al ciudadano incurso en un delito para el que se establecen penas severas, equivalentes a las que sancionan el cohecho y la defraudación, como en el caso de que se hubiera enriquecido por una actividad probadamente deshonesto. Sería explicable configurar un delito formal

dándole el carácter de una simple infracción a normas de un buen ordenamiento administrativo: exigir que el funcionario cumpla con sus obligaciones de declarar sus bienes y justificar aumentos en su patrimonio, a fin de aclarar su situación dentro de la administración pública. Pero, a nuestro modo de ver, no es correcto ni aconsejable que un delito formal, por falta de obediencia a requerimientos de forma, se convierta en delito grave, como el que sancionaría el dictamen en consideración.

Pensamos, pues, que debe existir una disposición concreta que reprima las situaciones que han preocupado a la comisión: el hecho de que funcionarios o ex funcionarios aparezcan, de un momento a otro, con una gran fortuna, un notable aumento patrimonial que razonablemente no encuentra justificación en ningún recurso lícito públicamente conocido al alcance del causante. Sería justo exigir la prueba en el caso de que pueda identificarse un hecho deshonesto, delictuoso, realmente contemplado por la legislación. Tal es el caso del ejemplo que citó el miembro informante de la mayoría: el homicidio. Se sanciona este delito probando la existencia de los elementos que constituyen la figura, sin perjuicio de que el inculpaado pueda después probar motivos de justificación. Lo mismo ocurre con otras figuras: el apoderamiento ilícito, el robo, y muchas otras para las que la ley norma acerca de lo que corrientemente sucede. Se comienza por caracterizar el hecho manifiestamente ilícito, reunidos cuyos extremos se comprende que se imponga el cargo de la prueba a quien trate de justificarse.

Por lo tanto, un aumento mínimo del patrimonio no puede, por sí solo, considerarse sospechoso. Debe comenzar por determinarse perfectamente el enriquecimiento ilícito; por caracterizarse el aumento patrimonial que se considere sospechoso y que dé lugar a la exigencia al inculpaado de probar que el incremento de su patrimonio se justifica.

En resumen, el criterio de nuestro dictamen en minoría es esencialmente que debe sancionarse de inmediato el proyecto aprobado por la Cámara de Diputados, convirtiendo en ley lo que realmente requiere urgente sanción, la derogación de la legislación represiva anómala.

Esto es lo que reclaman la opinión pública argentina, los sectores más calificados del país, los partidos políticos, los gremios, y las entidades respetables de todo tipo. Y posteriormente, las reformas penales que son por lo menos discutibles o no urgentes, como las que contiene el dictamen de la mayoría, que por sus características requieren un estudio más madurado, más reposo y menos apuro para su tratamiento, se considerarían en otra oportunidad, cuando nos ocupemos de la reforma integral del Código Penal o al tratarse un proyecto que tienda exclusivamente a mejorar las disposiciones del mismo, para introducir reformas tan delicadas como éstas.

**Sr. Presidente.** — Tiene la palabra el señor senador Bernardo.

**Sr. Bernardo.** — Señor presidente: en representación de mi sector he firmado el dictamen de la minoría que acaba de informar el señor senador Flores. Nosotros hemos entendido en este aspecto que lo fundamental, lo que hacía que esta sanción del Senado no demorara un instante más, era lo relativo a la derogación de las normas represivas anómalas que existen en el país. El proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo y el sancionado por la Cámara de Diputados contienen dos aspectos: uno que hace a la derogación de esas normas anómalas y otro modificadorio del Código Penal. Los dos son importantes, pero en el examen de cada uno de ellos estimamos que si bien es cierto que es necesario reformar el Código Penal e incluir normas como las del enriquecimiento ilícito, y que la media sanción de la Cámara de Diputados era susceptible de mejoras y de perfeccionamientos en cuanto al aspecto de fondo como en el de técnica legislativa en sí, estimamos que por encima de eso —que es muy apreciable y debe tenerse muy en cuenta—, estaba como prioridad número uno la de dejar sin efecto, sin más trámite, la legislación represiva anómala.

Esta actitud la adoptamos con una profunda fe y entusiasmo para producir este acto de derogación que aconseja el dictamen que hemos suscrito. Más aún, para nosotros ni siquiera es tarea difícil derogar esos decretos leyes dictados por el gobierno defacto que sucedió al golpe de Estado del 29 de marzo de 1962. Nosotros cumplimos con un deber ineludible con profunda vocación democrática y lo hacemos con el mismo entusiasmo con que en mayo y junio de 1958 sancionamos las leyes que dejaron sin efecto las inhabilitaciones políticas y gremiales, que dispusieron una amnistía general y la derogación de estos mismos decretos leyes.

Y repárese bien, señor presidente, que este proyecto que ha venido del Poder Ejecutivo en el mes de abril de este año está siendo motivo de discusión desde esa fecha hasta octubre, es decir que han transcurrido seis meses desde que el Poder Ejecutivo, movido por un sentimiento de justicia, envió el proyecto al Congreso. Y es del caso señalar aquí que en la oportunidad en que nuestro partido fue gobierno, a los cinco días de instalado el mismo se envió al Congreso de la Nación la ley derogando los decretos leyes represivos a que me he referido.

**Sr. Fassi.** — ¡Pero si vivió reprimiendo todo el tiempo! ¡Tuvo gremios movilizadlos!

**Sr. Bernardo.** — Rogaría al señor senador que me respete en el uso de la palabra...

**Sr. Fassi.** — Excúseme, señor senador.

**Sr. Bernardo.** — ...y con mucho gusto le voy a responder en su oportunidad a las observaciones que está formulando.

**Sr. Presidente.** — La Presidencia ruega al señor senador Fassi solicite las interrupciones.



Continúa el señor senador Bernardo, quien será respetado en el uso de la palabra.

**Sr. Bernardo.** — Nuestra posición y nuestra vocación democrática nos indican que la legalidad para todos sienta las bases y las condiciones necesarias para una auténtica paz social y concordia nacional, que son indispensables para posibilitar en el país el proceso de desarrollo económico y social que éste reclama con urgencia.

Esta nueva circunstancia, a seis años de aquella primitiva sanción, nos ve volver nuevamente a barrer estas aberraciones jurídicas engendradas por los personeros del golpismo, que constituyen hoy, a través del tiempo transcurrido, el mentís más elocuente a los pretextos que se esgrimieron para cohonestar el atentado a la Constitución en marzo de 1962.

La elaboración de ese andamiaje represivo, que hoy tenemos nuevamente que desmontar, fue la consecuencia necesaria del derrocamiento sufrido el 29 de marzo de 1962. Hagamos votos, señor presidente, para que esta experiencia que hemos sufrido no se repita en el futuro institucional del país.

Es necesario, señor presidente, a esta altura, hacer un breve examen del proyecto y mensaje del Poder Ejecutivo, acerca de las razones que lo movieron a enviarlo al Congreso. De este examen surge que en su mensaje, el Poder Ejecutivo dice que se solicita la derogación de normas penales que son contrarias a los principios constitucionales y la sanción de otras que configuran la máxima urgencia en materia de legislación penal de fondo. Continúa diciendo el mensaje: «... El proyecto de derogación de todas las normas de este tipo que no hayan sido establecidas por ley del Honorable Congreso porque sólo mediante una ley, de acuerdo con los artículos 18, 67, inciso 11, 68 y 63 de la Constitución Nacional, pueden establecerse preceptos que determinando delitos y penas restrinjan la libertad individual.»

Algunos despachos, como los de los diputados Sago y Caro, De Cara y Muniagurria, de Avila y de Muñiz, aceptan la tesis esgrimida por el Poder Ejecutivo en su mensaje, es decir, que la derogación está basada en la invalidez de estas normas por incompetencia, es decir, se sienta la tesis que podríamos llamar de la invalidez por incompetencia, conforme al artículo 18 de la Constitución Nacional, que establece que las penas sólo pueden derivar de las leyes strictu sensu, esto es, de actos legislativos emanados del Congreso, lo que equivale a decir que un órgano legislativo defacto que haya asumido el Poder Legislativo no puede sancionarlas.

La consecuencia inmediata de esta tesis es que los decretos leyes de que hablamos estarían viciados de inconstitucionalidad desde su origen, y serían absoluta e insanablemente nulos.

Otra tesis sustentada por el diputado Rouzaut va mucho más allá. Lleva las cosas al extremo de proponer que el Congreso, en lugar de derogar los mencionados decretos leyes, declare su invalidez; parecería ser que se hubiera confundido o no se hubiera advertido con claridad que la facultad de declarar la inconstitucionalidad de las normas legales no es del Congreso sino del Poder Judicial.

El doctor Ricardo Núñez, cuya opinión corre agregada al dictamen del orden del día número 88 de la Cámara de Diputados, no niega al Poder Ejecutivo defacto la facultad de dictar normas penales represivas. Afirma, en cambio, que vuelto el país al régimen de jure, la Constitución Nacional rige en su plenitud, y por consiguiente los habitantes del país tienen derecho a exigir que se aplique estrictamente el principio sustentado en el artículo 18 de la Constitución Nacional, y dice al final que el status constitucional actual no tiene por qué hacer concesiones de ninguna naturaleza a la situación defacto que vivió el país.

Nuestra posición, señor presidente, es distinta. Nosotros juzgamos correcto que el asunto que examinamos es sencillo y se resuelve como un mero problema de competencia. Si el gobierno defacto del doctor Guido o el de la Revolución Libertadora tuvieron competencia legislativa debido a que asumieron las facultades propias del Congreso, y las ejercieron válidamente, ninguna diferencia cabe hacer entre decretos leyes represivos y de otro orden. La competencia legislativa se tiene o no se tiene.

En este orden de ideas, debemos recordar que hace poco se ha sancionado una ley de tipo declarativo, estableciendo y sentando el principio de la continuidad jurídica, es decir, que si establecemos que los decretos leyes del gobierno defacto continúan en vigencia, así como también los decretos leyes mediante los cuales se legisló en materia civil, comercial y de minería, no hay razón alguna para establecer diferencias en el sentido de que si se tuvo competencia para legislar en esas materias, no puede negársela para hacerlo en otras.

Entendemos y sostenemos que los decretos leyes que reprimen al peronismo o al comunismo deben ser derogados, no porque tengan un vicio de incompetencia, sino porque son dañosos para el clima de paz social que vive el país.

Entro ahora a la consideración de los dos grandes temas relacionados con este debate: el peronismo y el comunismo, contra los cuales va dirigida la legislación represiva. A este respecto, afirmo que, con arreglo a la doctrina explicada, los decretos leyes represivos deben ser derogados. En términos generales, nos parece indiscutible la teoría según la cual el derecho penal democrático hace imposible la represión de doctrinas o ideologías, cualquiera sea su orientación. De acuerdo con ciertos presupuestos del sistema político en que vivimos y queremos seguir vi-



viendo, a las ideas sólo es lícito combatirlas con ideas. Esta es la concepción jurídica vigente entre nosotros, y la expone concisamente Núñez en el informe a que me he referido; es la que consagra la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el ya conocido «caso Rosemblat», con motivo del cual sostuvo que las ideologías en cuanto tales no son punibles, y que sólo cabe castigar el delito en la hipótesis de que esas ideologías se traduzcan en hechos o en actividades.

Estamos todos de acuerdo en derogar las normas que reprimen la actividad del peronismo. El Poder Ejecutivo nos dice que es necesaria la derogación, en primer término porque se trata de normas inconstitucionales por su origen, ya que provienen de un gobierno defacto, y en segundo lugar, porque no es lícito castigar las ideas. Y no dice nada más. El primero de estos argumentos —ya lo he expresado— de acuerdo con nuestro punto de vista es erróneo. El segundo —no castigar las ideas— es poco claro, y dice en realidad muy poco.

Todo el mundo sabe que hay otro problema fundamental, que se elude en los considerandos del mensaje: el creado por el proyecto sobre régimen de los partidos políticos. Este proyecto contiene un precepto según el cual debe negarse personería y, por lo tanto, posibilidad de actuación política, a los partidos denominados totalitarios, según las normas contenidas en el artículo 19, que son aquellas —dice— «que aspiran o tienden a la instauración de un sistema que desplaza las normas democráticas para reemplazarlas por otras de naturaleza totalitaria».

Y el caso es entonces preguntarse, señor presidente, si el peronismo es o no un partido totalitario. Si lo fuera, es probable que nuestra actitud frente al decreto 4.161/56 y sus correlativos tendría que ser muy cauta y muy reservada, porque esos decretos leyes prescriben ciertas restricciones aplicables a actividades que no serían del todo censurables si el peronismo fuera o constituyera un partido totalitario, por ejemplo, las que refiere el decreto ley 2.713/63. Dice en su considerando segundo: «Es preciso reprimir ciertas actividades peronistas por cuanto en suma el peronismo tiende a la implantación, bajo apariencias legales, de regímenes contrarios al sistema democrático», lo que equivale a decir que cae dentro de las prohibiciones del Estatuto de los Partidos Políticos en vigor, o sea, dentro de las disposiciones del decreto ley 12.530/62 y que el Poder Ejecutivo ha proyectado y envió el Congreso.

No es posible, en consecuencia, sancionar un dictamen sin responder a este interrogante: vamos a dejar en pie el sí o el no; la tremenda afirmación que aparece en el decreto ley 2.713. Nosotros no tenemos duda sobre este punto. Los decretos de que hablo deben ser derogados, no solamente porque avanzan ilícitamente sobre la libertad de expresión o de opinión, sino también

y fundamentalmente porque creemos que el peronismo no es totalitario. Quienes así lo afirmaron desde antiguo y atribuyen esa calidad son los inevitables y envejecidos sectores empeñados como siempre en producir la disgregación de las fuerzas nacionales y populares mediante el uso de esa falsa polarización. Esta es muy antigua y conocida. Viene siendo empleada con especial énfasis desde una época no muy lejana. La técnica consiste en ocultar cuáles son los verdaderos antagonismos, los reales motivos del conflicto que separan a la familia argentina, como medio para provocar divisiones o encasillamientos que no corresponden a la realidad del país.

Afirmo también que esa polarización, además de falsa, es paradójica, porque muchos de esos sectores titulados democráticos son los integrantes de minorías ilustradas que durante muchos años gobernaron al país y que jugaron sistemáticamente al golpe militar y terminaron muchas veces exponiendo la atroz teoría de la dictadura, la dictadura de los democráticos encaminada a ilustrar al pueblo, enseñándole por la violencia despótica lo que es la verdadera democracia.

Nosotros entendemos que este sector del pueblo argentino no es totalitario y que se encuentra en el sector político-social del país un bloque que ha de ser eficaz y de gran provecho cuando en el país haya que romper definitivamente con ciertas estructuras económicas que lo mantienen postergado y sumergido.

Otro aspecto, señor presidente, es el del comunismo. Creemos que es injusto que se trate a estos dos sectores políticos o que se los mida con la misma vara. Uno, como lo he expresado, tiene una raigambre nacional, responde a intereses nacionales y populares; el otro, obedece a ideologías foráneas, muchas veces, por no decir la mayoría, a directivas de orientaciones que vienen desde fuera del país. Entendemos que no puede existir el mismo tratamiento, y por ello creemos que las normas represivas del comunismo si bien es cierto también deben ser derogadas, adoptamos en esta materia una posición jurídica que coincide sustancialmente con la que define la Suprema Corte de los Estados Unidos en el caso *Dennys* en 1951, en el que, con el voto del presidente de la Corte, Vinson, el más alto tribunal de los Estados Unidos aplicó la regla del llamado peligro claro y presente, que anteriormente había sido elaborado por los jueces Oliver, Wendell Holmes y Brandeis en sus célebres disidencias.

En los Estados Unidos ha existido, con respecto a la represión del comunismo —que bien es explicado en estos fallos o en la posición que la Corte en determinado momento y oportunidad de su vida política le tocó aplicar—, una curva que marcaba los distintos momentos o estados de presión en que, por razones de seguridad del Estado, era precisa la

aplicación de normas que reprimieran al comunismo, tales como los ocurridos en períodos de la guerra fría y durante el conflicto con Corea.

Es decir, entendemos que la forma y momento de aplicación en el caso del comunismo debe tener presente este principio: el del peligro claro y presente, que en determinado momento aparece en la vida política de los pueblos. No combatir la ideología per se o por ser un tipo de pensamiento político, sino cuando ella, en los hechos, presenta un peligro claro y presente, y se hace necesaria, en defensa de las instituciones y de la integridad del mismo país, la aplicación de esas normas.

Señor presidente: encontramos en este mensaje del Poder Ejecutivo que cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados, y aun en los distintos despachos que han producido las comisiones del Senado, un olvido —no sé si llamarlo así—, pero resulta que desde el año 1956 existe un decreto ley represivo que no fue, ni ha sido, ni es incluido en esta ley que deroga los decretos leyes represivos: me refiero al 4.072 del año 1956 que disolvió el Partido Socialista (de la revolución nacional). Si consideramos los argumentos que en aquella oportunidad se dieron en el sentido de que la disolución de esta fuerza política se hacía por el hecho de que se la consideraba como un mero apéndice servil de la tiranía depuesta —así decía uno de los considerandos del decreto—, nosotros vamos a derogar los decretos leyes que reprimen el comunismo y los que reprimen la actividad peronista, quedando en el país una fuerza política que sigue siendo proscrita por un decreto que no ha sido incluido, pienso posiblemente por un olvido, ya que no sé a qué otro motivo atribuirlo. Quiero señalar en esta oportunidad que es necesario que este olvido sea rectificado.

Señor presidente: en cuanto a las modificaciones introducidas en el Senado por la mayoría de las comisiones de Legislación General y de Asuntos Constitucionales, Administrativos y Municipales, no me voy a referir a ellas en particular. Ya el inciso 4º del artículo 3º fue objeto de un amplio y prolongado debate en la Cámara de Diputados, en el que todos los sectores políticos dieron su opinión y finalmente esa disposición legal incluida en esta ley fue suprimida.

Esta disposición, que configura un nuevo tipo de delito, sin entrar a las discusiones y a las argumentaciones que se hicieron en uno y otro sentido, porque sería largo hacerlo, merecería, al igual que muchas de las otras disposiciones, el estudio profundo y concienzudo del Congreso para poder obtener una norma legal que sea la expresión de una necesidad ambiente o la expresión de una norma que la sociedad y el pueblo requieren.

Aunque no es del caso, voy a referirme muy superficialmente a la interrupción que me for-

mulara el señor senador Fassi, sin ánimo de entrar en una vía polémica, pero sí señalando lo que, en nuestro concepto, entendemos que corresponde. Se me interrumpió en forma un tanto desusada por el señor senador Fassi, diciéndome que nosotros, cuando fuimos gobierno, habíamos vivido en el estado de sitio y se habían cometido actos represivos.

Nosotros reconocemos perfectamente bien esos hechos y esas circunstancias y asumimos la plena responsabilidad histórica que como gobierno nos tocó afrontar en aquella oportunidad. Pero no debemos olvidar las condiciones en que tuvo que desenvolverse el gobierno de Frondizi, que fueron excepcionales en el país. Nadie ignora que antes de hacerse cargo del gobierno estaban en gestación golpes de estado tendientes a impedir la asunción del mando y luego, cuando ésta ocurrió, se tramó una infinidad de movimientos subversivos destinados a perturbar la paz y la tranquilidad que el país necesitaba después de haber salido de ese proceso difícil comprendido entre los años 1955 y 1958.

No es tampoco del caso comparar las épocas. Felizmente, muchos de aquellos factores que determinaron planteos de distinta índole, como por ejemplo las huelgas de tipo revolucionario, han desaparecido durante este gobierno. Factores que afectaron el orden social, político y hasta humano, y es público y notorio que, hasta hace poco, hubo sectores de las fuerzas armadas que trabajaron intensamente para derrocar al gobierno constitucional de Frondizi. Pero también hubo sectores reaccionarios del comunismo que llevaron al país al borde de la anarquía y que trabajaron en pos de un golpe de estado, de una revolución para el derrocamiento de las instituciones y de las autoridades constitucionales. Entonces surgió el imperativo de reprimir toda esta actividad subversiva, ya que, así mismo, sectores reaccionarios dentro del peronismo se confabularon para provocar situaciones —me refiero, señores senadores, a sectores reaccionarios y no a la agrupación política en sí— en connivencia con el comunismo para desembocar en un estado de anarquía que asolará nuestro país. En consecuencia, se hizo necesaria la represión en defensa de las instituciones, de la legalidad y de la garantía de los derechos, ya que éstos son los deberes fundamentales de todo gobierno a los fines del mantenimiento del orden y de la estabilidad de las autoridades nacionales. Para ello debió combatirse reprimiendo con serenidad aunque con energía los intentos de subversión, de golpismo y de terrorismo.

La legalidad es ilusoria en un Estado en que las instituciones están sometidas al desgaste disgregador de la violencia y del desorden.

Señor presidente: con las argumentaciones que acabo de hacer y porque una indisposición me impide ser más extenso, dejo fundamentado mi voto por el despacho de la minoría.

**Sr. Presidente.** — Tiene la palabra el señor senador Aguirre Lanari.

**Sr. Aguirre Lanari.** — Señor presidente: nosotros vamos a adherir al despacho de la mayoría por las razones concretas que expondremos en cada caso particular, por entender que significa una mejora con respecto al proyecto que viene en revisión, pero sin que ello implique que no tengamos algunas discrepancias, que también señalaremos concretamente cuando ello corresponda.

Coincido con el miembro informante de la mayoría en que resulta difícil hacer una exposición general y que, por el contrario, es oportuno, para no perderse en vaguedades, demostrar determinadas afirmaciones de tipo concreto que fundamenten la posición que sostenemos. Sin perjuicio de ello, he tratado de sistematizar cuáles son las directivas fundamentales del proyecto formulado por la comisión, en mayoría, de este cuerpo, que por otra parte coincide en su espíritu con el proyecto que viene en revisión de la Cámara de Diputados.

Por un lado podríamos distinguir el aspecto de lo que llamaríamos la determinación de las disposiciones vigentes, o sea, la derogación de diversos decretos y otras disposiciones, cosa que se contempla en los artículos 1º y 2º del proyecto en consideración.

Como segundo aspecto tenemos las distintas modificaciones y agregados a las figuras del Código Penal, lo que se contempla en los artículos 3º al 10 del despacho materia de consideración.

En tercer lugar, debemos resaltar la elevación de penas sin modificar los elementos de las figuras correspondientes, cosa que trata el artículo 11.

En cuarto término, la modificación parcial del sistema de excarcelación del Código de Procedimientos, prevista en el artículo 12.

Y por último, la derogación de los efectos derivados del carácter de ley penal temporal de la llamada «ley de terrorismo».

En lo que respecta al primer aspecto, o sea a la derogación de los distintos decretos leyes y otras disposiciones contempladas en los artículos 1º y 2º del proyecto que consideramos, ha existido conciencia general respecto de este paso tan trascendente. No creo oportuno formular consideraciones de índole política, pero deseo evidenciar que todos los sectores que hoy votamos esta medida lo hacemos con el ánimo cierto de propender a una pacificación nacional. Los hechos que sobrevengan nos dirán si estamos en lo cierto o si por el contrario existen quienes se oponen, con determinadas medidas, a ese propósito que nos anima.

Yo creo, señor presidente, que no dejamos desguarnecido el orden público con las medidas que hoy se toman, pero me creo en la obligación de afirmar que no rehuiré responsabilidades si las circunstancias demostraran lo contrario, obli-

gando a un replanteo del problema o si una acción subversiva lo exigiera, al poner en peligro la integridad de las instituciones que queremos afirmar.

Por estas razones, y refiriéndome a la discusión suscitada en la Cámara de Diputados sobre si convenía derogar lisa y llanamente las disposiciones contempladas en el artículo 1º del proyecto, dejando los agregados propuestos en el artículo 213 para una reforma total del código, me inclino por lo proyectado por la mayoría, aceptando una reforma parcial que no creo prudente dilatar. Si las circunstancias y el estudio más sereno nos inclinaran a aquella reforma, yo creo que el Congreso tendrá la sensibilidad suficiente como para abordarla.

Y ahora, señor presidente, paso a analizar el segundo grupo de disposiciones de la ley proyectada, o sea los artículos 3º al 10 del dictamen de la mayoría, que modifican diversas figuras delictivas contenidas en el Código Penal.

En el artículo 3º se procura incorporar un capítulo más al título «De los delitos contra el orden público» del Código Penal. El artículo único que contiene este proyecto es el titulado 213 bis, que contempla, en cuatro incisos, situaciones bastante distintas.

En el primero de ellos se restablece, con alguna diferencia, la redacción del inciso equivalente que había sido proyectado por la mayoría de la comisión en la Cámara de Diputados. En esta Cámara, al discutirse en general el proyecto, fue atacado este inciso, estimándose que en realidad se superponía a situaciones ya contempladas en el artículo 210 del Código Penal. Quienes defendían su inclusión consideraban que en realidad se trataba de situaciones distintas, o sea que se refería a una hipótesis en la que no se buscara o pretendiera la comisión de delitos por parte de la asociación ilícita, como lo requiere el artículo 210 del Código Penal. Efectivamente, creo que este es el caso, pues la confusión entre ambas hipótesis surge de olvidar que la violencia no es delito en el Código Penal argentino, de manera que una asociación que pretenda realizar violencias no es necesariamente una asociación para cometer delitos. Pero tenemos algunas realidades, o formas morbosas, como decía recién el señor senador Fassi, y por eso creo que el proyecto del Senado mantiene la punición de este último criterio, confirmado por la pena menor que establece con respecto a la del artículo 210 del Código Penal, lo que me parece muy acertado.

En la Cámara de Diputados, al entrar a considerar en particular este inciso, no fue aprobado, en cumplimiento de un acuerdo general de los distintos bloques, según informara el señor diputado Bravo. El señor diputado Luco agregó que la eliminación obedecía a que no se deseaba crear una asociación ilícita paralela a la contemplada en el artículo 210, según acabo de referir.

Sin embargo, a mi juicio, no se trata de una superposición, sino de un distinto enfoque de

actividades que deben considerarse delictuosas, tal cual lo dispone el Código Penal suizo, que es sin duda alguna la fuente de la cual tomó esta disposición el doctor Núñez en su proyecto y que reprodujera inicialmente la mayoría de la comisión en la Cámara de Diputados.

Por estos motivos, desde el punto de vista sistemático, yo creo que sería preferible incluir este supuesto del inciso primero como un párrafo final del artículo 210, o, en última instancia, como un artículo 210 bis, para colocarlo dentro del capítulo de la asociación ilícita.

Desde el punto de vista de la técnica, creo también que correspondería una frase similar a la que tiene el propio artículo 210 en el sentido de que se incurre en la sanción penal por el solo hecho de ser miembro de la agrupación. De esta manera se evitaría la defensa de que no bastaría con ser un miembro de esa asociación, sino que sería necesario que la misma se pusiera en movimiento, lo que estimo no está precisamente en el ánimo de quienes propiciaron o votaron en su oportunidad este proyecto.

En lo que respecta al inciso segundo, creo que podría haberse efectuado consideraciones similares. Recojo lo que ha dicho el señor senador Fassi en el sentido de que tiene su fuente en disposiciones de las Naciones Unidas y entiendo que es un agregado oportuno.

En cuanto a la realización de la propaganda, y en este sentido formulo una crítica, creo que la ley debiera expresar que ella será pública para que de esta manera quede lesionado el orden público y no pueda aparecer comprometida la conciencia y opinión simplemente individual sin ninguna trascendencia exterior y, por lo tanto, sin lesión a ese orden público.

En el inciso 3º creo que prácticamente vamos llevados de la mano por las consideraciones anteriores, en el sentido de que también debería agregarse la palabra «pública» para el caso de incitación. Por consideraciones similares a las que me llevaban a entender conveniente la inclusión de la cláusula «por el solo hecho de ser miembro de la asociación», en el caso de los incisos anteriores, estimo que también habría que agregar que la penabilidad se produce por la sola instigación, como sucede en el artículo 209 del Código Penal, que se refiere a la instigación a cometer delitos, para evitar que se alegue que el delito se consumó recién cuando empieza a operar la violencia.

En resumidas cuentas, con las salvedades que he expresado, me parece oportuno el artículo proyectado, no sólo por la inclusión del inciso 1º, sino también porque contempla la situación de brotes antisociales que pretenden sembrar el odio en nuestro medio por motivos racistas o eventualmente religiosos, y es necesario calificar penalmente esta conducta.

Frente a críticas a veces interesadas y efectuadas desde el extranjero con propósitos que no vienen al caso, es conveniente mostrar ante el mundo que nuestro país no vive la realidad

deformada en que se pretende colocarlo con respecto a los hechos que están previstos en estos artículos.

En el inciso 4º del artículo 213 bis se vienen a reproducir algunas variantes de lo proyectado por la mayoría de la comisión de la Cámara de Diputados, que a su vez tuvo su fuente en el proyecto Núñez. Me parece mejor la redacción que ahora se propicia y que no tuvo sanción de la Cámara de Diputados, porque se requiere que la instigación sea pública y no simplemente privada, ya que sólo así se lesiona o compromete el orden público. Está ratificada esta circunstancia por la frase final del proyecto que comentamos, que dice «cometiendo hechos u omisiones que pueden comprometer el orden público».

En este sentido, la explicación que acaba de dar el señor senador Fassi es oportuna, porque evita, como él lo explicó, que pueda incriminarse una mera falta de disciplina. Su explicación nos adentra también en antecedentes extranjeros remotos y demuestra que no se trataría de una simple creación circunstancial.

En el artículo 4º del proyecto, el agregado que se propone al artículo 218 del Código Penal tiene como fuente inspiradora el proyecto Soler, aunque no íntegramente porque suprime la parte final, en la cual dicho tratadista atenúa la pena, en este caso, de acuerdo con una disposición de su proyecto que consagra una disminución similar a la que figura en la tentativa del Código Penal.

Me parece oportuna la reforma que se propone y su inclusión dentro del título «Delitos contra la seguridad de la Nación», y del capítulo sobre «Traición». Aun cuando la traición tiene naturalmente como sujeto activo a un nacional del país, resulta sin embargo oportuno vincular a ese caso la acción que con propósitos lesivos para el mismo realizan los extranjeros, circunstancia que debe tenerse especialmente en cuenta en un país con grandes contingentes inmigratorios, como es el nuestro. Soler destaca esta circunstancia en su nota al artículo pertinente, cuando habla del vínculo de subitaneidad.

Ahora bien, aunque resulta justo que se contemple la penalidad para los extranjeros, como dije antes, me parece oportuno atenuar su responsabilidad, tal cual lo hace Soler en su proyecto. En este sentido propongo que en la disposición proyectada se agregue el siguiente párrafo, luego de un punto y seguido: «En este caso se aplicará la pena disminuida, conforme a lo dispuesto en el artículo 44», que es, según sabemos, el que dentro del Código Penal habla sobre la pena de la tentativa.

En el artículo 5º advierto una diferencia entre lo proyectado por la mayoría de la comisión y la sanción de Diputados. Estos últimos consideraron implícitamente derogado el artículo 222 del Código Penal por los artículos 2 y 3 de la ley 13.285 sobre sabotaje y espionaje, y por eso

lo incorporaron como artículo 222 en lugar del anterior, que, repito, lo consideraron implícitamente derogado. En el proyecto del Senado la mayoría en cambio se propone agregarlo como segunda parte del artículo 222 que, de esta manera implícitamente, se considera vigente. La verdad es que el artículo proyectado, a mi juicio, no encaja bien como segunda parte del mencionado artículo 222, porque se trata de materias distintas, pero no hago cuestión de ubicación. Este artículo tiene antecedentes en el proyecto Peco y en el proyecto Soler, que contemplan el caso de menosprecio a los símbolos nacionales, así como también a los extranjeros, y lo mismo, señor presidente, ocurre con los códigos más modernos, como el propio Código Penal suizo, país federal que por eso mismo también incluye entre sus disposiciones, junto a ésta, la afrenta que se hiciera a los emblemas cantonales.

Atento a la tradición de buenas relaciones internacionales, me parece que no debiera olvidarse el ultraje a los símbolos extranjeros, y como representante de una provincia, y conforme incluso con el antecedente de derecho comparado que acabo de citar, me parecería oportuno incluir también los emblemas provinciales. Por tales consideraciones, dando mi apoyo a la disposición proyectada, me parece oportuno sugerir que se agregue también, a continuación de la palabra «Nación», «de un Estado extranjero o los emblemas de una provincia».

En el artículo 6º hay una diferencia con el proyecto de la Cámara de Diputados. Esta lo incorpora como artículo 253 bis, dentro del capítulo sobre abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público, con lo cual este delito se convertiría en un delito de acción pública. En el proyecto del Senado se coloca el artículo proyectado reemplazando al actual artículo 157 del Código Penal, dentro del capítulo «Violación de secretos». Me parece mejor esta ubicación que se proyecta en el Senado, puesto que incluso en el artículo 154 se contempla el caso de un funcionario, como es el de un empleado de Correos y Telégrafos, como bien recordaba recientemente el señor senador Fassi.

En cuanto a la calificación del delito como de acción pública y no como delito de acción privada, queda salvado con el agregado que se propone en el despacho de la mayoría de la comisión, de modo tal que coincida en que se considere de acción pública, dada la trascendencia y la naturaleza especial que tiene este delito.

Hay también, señor presidente, otra diferencia con respecto a la Cámara de Diputados. Se habla de funcionario o empleado público. En el proyecto del Senado se habla solamente de funcionario público, lo que sin duda alguna resulta de mejor técnica legislativa, atento a lo

que preceptúa el artículo 77 del Código Penal, que expresamente da la significación del término. Las palabras «empleado público» utilizadas por la Cámara de Diputados resultan, sin duda alguna, redundantes dentro de la hermenéutica del Código Penal.

En el artículo 7º coincide con lo proyectado por la Cámara de Diputados y me parece oportuna su ubicación dentro del capítulo de malversación de caudales públicos. En realidad tiene su fuente inspiradora en el proyecto Soler también en su artículo 354. Resulta evidentemente innecesario fundamentar la oportunidad de incluir esta disposición atento los numerosos y repetidos ejemplos de que tenemos experiencia en cuanto al menosprecio con que se tratan los intereses de la administración pública.

Por otra parte, la posibilidad de que se puedan cometer injusticias o demasías en la aplicación de este artículo, queda frustrada a mi modo de ver por las explicaciones que, a guisa de ejemplo, diera el senador Fassi para diferenciarlo del llamado peculado de uso.

En el artículo 8º hay también diferencias con el proyecto de la Cámara de Diputados. Ella incorpora como capítulo IX bis, y bajo el epígrafe del enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados a tres artículos bajo los números 268-1, 268-2 y 268-3.

El proyecto del Senado desglosa el contenido de aquellos artículos proyectados con algunas variantes. Una parte de este contenido informa el artículo 8º del proyecto de la mayoría del Senado incorporándolo al capítulo de cohecho, artículos 256, 258 y 259 del Código Penal, cuyo reemplazo se propone por otras disposiciones.

La otra parte de lo proyectado por Diputados conforme al artículo 9º del dictamen de la mayoría del Senado se incorpora como capítulo IX bis del título II, que trata sobre delitos contra la administración pública, bajo el epígrafe de enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados. Me parece un acierto el proyecto de la mayoría del Senado en cuanto al método porque los casos que se incluyen en los artículos 256, 258 y 259 son los que, en técnica jurídica, se llaman formas impropias del delito de cohecho.

El artículo 256 proyectado por la mayoría de la comisión incluye una pena paralela aumentada en su escala con respecto al Código Penal. También la reforma agrega la hipótesis del cohecho impropio que contempla el antiguo artículo 256 del Código Penal en su parte final. Esto, a mi modo de ver, está indicando que es acertada la inclusión de la disposición tal cual lo ha proyectado la mayoría del Senado porque se trata de un cohecho evidentemente, aunque sea un cohecho impropio, y es lógico que esté incluido aquí y no en el capítulo de enriquecimiento ilícito, como lo establece la sanción de la Cámara de Diputados.

Si se aduce en contra que de todas maneras puede existir enriquecimiento ilícito, cabe res-

ponder que aún en el caso de cohecho propio cabe también el enriquecimiento ilícito y nadie discute su buena ubicación actual.

El artículo 258 es prácticamente el del código vigente, pero se le ha aumentado la pena guardando cierta conformidad con la escala que se propone para el artículo 256 y además se modifica la redacción para que contemple también la nueva hipótesis a que acabo de referirme.

El artículo 259 del proyecto del Senado se aparta de la sanción de Diputados que, como recordaba, lo colocaba dentro del enriquecimiento ilícito y conserva así la estructura del código actual incluso con mejor redacción que el proyecto de Diputados cuando habla solamente de funcionarios públicos.

En el proyecto de la mayoría del Senado, coincidentemente con el de la Cámara de Diputados se agrega, respecto de la disposición actual del Código Penal, el castigo para quien ofrece la dávida, cosa que me parece acertada.

Estimo prudente lo proyectado en el Senado conservando lo que dice el Código Penal actual cuando exige que para la tipificación del delito el funcionario permanezca en el cargo, requisito que había sido suspendido por la Cámara de Diputados.

En el artículo 9º del proyecto que consideramos se incorporan dentro de delitos contra la Administración Pública, bajo el epígrafe «Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios y Empleados», disposiciones que el proyecto de la Cámara de Diputados juntaba con las restantes que sobre cohecho hemos analizado anteriormente.

Cabe anotar una falla en el proyecto que estamos considerando cuando habla de «funcionarios o empleados», por razones de técnica a que aludí anteriormente. Por otra parte, me parece que en lugar de incluirlo como capítulo IX bis, y para no alterar tanto la conformación del código actual, podría incluirse dentro del capítulo VIII, el cual podría pasar a denominarse «Negociaciones y Enriquecimientos Incompatibles con el Ejercicio de Funciones Públicas», como corolario de los artículos propuestos.

Por otra parte, como error de técnica anoto que la frase «artículo 256 del Código Penal» parece redundante; bastaría decir «artículo 256», pues se sobreentiende que se trata del Código Penal.

El artículo 258-1, que habla de los funcionarios públicos que con fines de lucro utilizan para sí o para un tercero informes de carácter reservado de que hayan tomado conocimiento en razón de su cargo, tiene su fuente en el proyecto Soler y estoy de acuerdo con su contenido, que se fundamenta por sí mismo.

En cuanto al artículo 258-2, que ha sido muy debatido, tiene también su fuente en dicho proyecto Soler, sin perjuicio de algunos más añejos antecedentes. Se han esgrimido argumentos de peso en contra de la inversión de pruebas

que establece este artículo y, sin dejar de aceptar que existen objeciones importantes, me inclino en favor de su sanción. He leído los fundamentos de Soler y los comparto, puesto que quien pasa por la función pública tiene obligaciones especiales, y el artículo proyectado impone una muy clara y a mi modo de ver nada desmedida. Este artículo no sólo sirve para facilitar el castigo de los culpables sino que habrá de proteger también a muchos inocentes injustamente sospechados, diferenciándolos con claridad de quienes realmente delinquen y pasean ostentosamente una fortuna mal habida. En este país, donde es tan común pretender destruir la reputación ajena, hay que facilitar los medios para que se aclare el dilema; hay que castigar a los que se enriquecen indebidamente y permitir esa distinción con muchos otros ciudadanos que han pasado con desinterés y abnegación por la función pública, sin incremento indebido en su patrimonio. Coincido con el artículo, pero me parece oportuno mejorarlo, y participo de la opinión del señor senador Flores cuando propone incluir lo que establece Soler: «que el incremento patrimonial debe ser considerable», o, casi diría mejor, la frase que citaba el señor senador Fassi, refiriéndose al antecedente del proyecto Peco: «que el incremento sea apreciable».

Evidentemente, como señalaba el señor senador Flores, hay que distinguir casos especiales evitando una indiscriminación en el artículo. Y en este sentido debe quedar como interpretación auténtica, porque una cosa es que un funcionario aumente su patrimonio con una máquina de escribir y otra que ostente un automóvil o una casa. De ahí que la interpretación por la justicia tiene que ser prudencial y teniendo en consideración las circunstancias de hecho.

Considero que también habría que completar el artículo, o mejor dicho el régimen que establece, señalando que la prescripción de la acción de estos delitos incluidos en el enriquecimiento ilícito y el cohecho debe estar suspendida mientras cualquiera de los intervinientes permanezca en la función pública. Estoy de acuerdo con el artículo 10, suficientemente debatido desde hace mucho tiempo en la opinión pública, dados los argumentos que se han expuesto sobre el particular. Sin embargo, debo señalar mi discrepancia con el inciso 1º en lo que se refiere a la comunicación del rechazo que establece, por dos motivos. Primero, porque debiera concretarse mejor en qué consiste esta comunicación. Con la frase «habérsele comunicado» parecería indispensable la presencia del deudor, lo que impedirá muchas veces a éste, en forma deliberada, especular con su ausencia. Por eso me parece más claro redactar el artículo dejando su primera parte igual y decir luego: «el que dé en pago o entregue por cualquier concepto a un tercero un cheque sin tener provisión de



fondos o autorización expresa para girar en descubierto, y no lo abonare en moneda nacional dentro de las 24 horas de habersele comunicado fehacientemente la falta de pago o de haberse efectuado el protesto...».

En el artículo 11 del proyecto que consideramos en cuanto a la elevación de penas que dispone, poco o nada diré porque en general me parece acertado y no es muy desproporcionado con todo el conjunto del Código Penal. En este punto es evidente que será preciso llevar a cabo una revisión general, particularmente en cuanto a las multas a las cuales la inflación ha llevado hoy a una situación verdaderamente risible; hoy día una multa no es una sanción pecuniaria sino simplemente moral, por así decirlo.

Y por último en lo que respecta al artículo 12, la modificación del sistema de excarcelación contenido en el mismo, o sea la reforma del artículo 377 del Código de Procedimientos, me parece acertado, salvo en cuanto a la forma, que realmente la encuentro sumamente confusa.

Por tales fundamentos y las consideraciones que agregaré al discutirse en particular este proyecto, damos nuestro voto favorable al despacho de la mayoría. (*Aplausos.*)

**Sr. Presidente.** — Tiene la palabra el señor senador Ovando.

**Sr. Ovando.** — Señor presidente: he solicitado el uso de la palabra a los efectos de fundar mi voto a título personal, no comprometiendo en manera alguna con ello al bloque a que pertenezco.

Entiendo que la derogación de los decretos leyes represivos debe hacerse pura y exclusivamente en lo que a ellos respecta. No comparto los despachos de la mayoría ni de la minoría en cuanto introducen reformas al Código Penal y lo hago pese a los enjundiosos conceptos y fundamentos que se han dado, ya que esa debe ser materia de exclusivo estudio, sobre todo cuando existe en el Congreso un proyecto de Código Penal que debe tratarse a la brevedad posible.

Por esas razones voy a solicitar lisa y llanamente la derogación de la legislación represiva traída al debate, y así lo hago por cuanto entiendo que dicha legislación constituye una afrenta a la dignidad, un atropello a las libertades públicas y una brecha al sistema jurídico-institucional que nos rige.

La derogación, repito, debe ser lisa y llana, toda vez que las reformas que se pretenden introducir al Código Penal no son otra cosa que ciertos aspectos que un trasplante de los preceptos represivos que no tienen razón de ser si se tiene presente, como acabo de expresarlo, que obra en el Parlamento desde hace cuatro años un proyecto de Código Penal del profesor Sebastián Soler, en el que se contempla con claridad la distinta gama de delitos modernos y no la simple represión de intereses políticos.

Por otra parte, señor presidente, no se puede olvidar el origen, el contenido y la causa o mo-

tivo de estos decretos; ellos fecundaron en un ambiente político, económico y social que nubló nuestros cielos antes lúcidos y de cuya atmósfera cargada de presagios nacieron esos decretos a través de un procedimiento que yo califico de exótico. Quienes lo han hecho odian indudablemente al pueblo, al que combaten aliados de la injusticia y de la arbitrariedad. El contenido y el espíritu de esos decretos son indudablemente liberticidas y fueron inspirados, señor presidente, por miedo a la soberanía popular y están impresos de una anemia política con grave hipertrofia del instinto de libertad y una parálisis total del sentimiento de patria. Sólo así podemos explicarnos que en nuestro país haya sido violada la Constitución e incluso el territorio hasta el último pliegue de sus llanuras agresivas, y que el alma nacional se encuentre ausente, tal vez refugiada en las montañas silentes o bajo el verde tapiz de nuestras selvas vírgenes.

Este país, señor presidente, que debió ser el hogar de una raza, hoy tiene que conformarse con ser el campamento de todas las razas. Este país, que debió ser la capital de una civilización, no es más que el aduar de tribus exóticas que parecen anunciar la agonía de una raza de nobles perseguida por el hado adverso del destino.

Nuestra Constitución, pese a las violaciones que viene soportando en forma permanente y sistemática, conserva su candor y su pudor. Es madre de libertades públicas y como tal estamos en la obligación de defenderla. Los decretos cuya derogación exigimos son violatorios y atentatorios de esa Constitución. Expresamente lo dice el artículo 18 de la Carta Magna, que no permite el juicio sin una ley previa, y esa ley previa, señor presidente, no puede dictarla otro poder que no sea el Legislativo, y no podemos admitir que un presidente defacto, llegado a la primera magistratura del país a horcajadas del caos y sobre el cadáver de la democracia, se permita dictar decretos que reprimen incluso la libertad de pensar. Dichos decretos liberticidas, señor presidente, violan también el artículo 67, inciso 11, de nuestra ley fundamental. Lamento, con tristeza, confesar que nuestra Constitución, la que deberíamos llevar sobre nuestras cabezas como un palio y sobre nuestros corazones como un escudo, no haya servido esta vez como coraza contra la lanza de los bárbaros, que a través de estos decretos se han hendido en el corazón mismo de las libertades públicas, flagelando a la democracia y poniendo cerrojo al pensamiento libre.

El país, señor presidente, vive horas de zozobra en lo político, en lo económico y en lo social. Yo espero que esas horas sean de transición. Un pueblo con hambre no es un pueblo libre, y un pueblo sin libertad camina hacia el desastre. No permitamos detenerlo con decretos



que encadenan más esas libertades, porque con ello sólo conseguiremos empujarlo hacia el abismo.

Debemos tener cuidado, señor presidente. Nuestro pueblo, que está al margen de toda clase de provocaciones, viene soportando con estoicismo y con excesiva tolerancia la injusticia social que se cierne despiadada sobre sus espaldas, la de sus hijos y la de sus nietos. No provoquemos a ese pueblo, señor presidente, que como un potro indómito, impaciente, relincha en el horizonte. Pronto ha de romper los alambres de púa que frenan su libertad, y entonces tendremos que verlo saltar sobre las pampas y correr desesperado trayendo atada a las colas las heces incendiadas de la devastación de toda la obra de oprobio que viene soportando.

Señor presidente: miremos de cara al sol la realidad. No tengamos miedo al pueblo que reclama justicia e igualdad. No nos olvidemos de nuestra tradición. No temamos al lenguaje de libertad que hablaron nuestros mayores cuando eran argentinos y tenían el derecho y el orgullo de serlo, porque no habían vendido aún la tierra en que nacieron, ni habían hecho un campamento de bárbaros bajo el cual fuera desapareciendo con su historia y con su raza.

No olvidemos, señor presidente, que los que argentinos somos, vivimos en permanente vela de nuestras libertades. Estamos a tiempo de hacer de ellas nuestro estandarte para ponerlo sobre nuestras cabezas como un palio, sobre nuestros corazones como un escudo y marchar con ellas adelante como la columna de fuego de la Biblia, indicando a los pueblos del mundo que sólo mueren las razas quietistas y estacionarias, pero no las de gloria y epopeya como la nuestra.

Jiménez de Asúa, que no es desconocido para nadie, afirma que los decretos leyes cuya derogación reclamamos imperiosamente son violatorios de la Constitución Nacional. Son injustos, pero afirma algo mucho más grave: dice que son ilícitos. Hago mío ese término y exijo extirpar de cuajo la gelatinosa decrepitud de esos decretos liberticidas porque, de lo contrario, no podemos dar al pueblo el camino que está reclamando para recorrer con libertad. No olvidemos que la libertad de opinión, de credo y de pensamiento, contra la que apuntan estos decretos leyes, es el último refugio de la libertad perseguida y de la dignidad humillada. Seamos pues el custodio de esa Bastilla que hoy se encuentra amenazada.

Estos decretos constituyen, señor presidente, la negación de la personalidad humana y una afrenta a la democracia que se pretende defender con ellos. No se puede matar en nombre de la vida, no se puede pecar en nombre de la virtud, no se puede encadenar en nombre de la libertad ni odiar en nombre del amor. Crear delitos peronistas o comunistas es renegar de la libertad y confesar la impotencia de las hormigas de la democracia que en estos momentos se encuentran en lo más hondo de sus hormi-

gueros para evitar el encuentro con las plantas de la verdadera democracia que pueda aplastarlas.

El día en que los hombres consigan poner cerrojo al pensamiento habremos perdido la condición de tales; habremos renunciado trágicamente a la esperanza; habremos perdido la libertad y nos habremos convertido en una bestia innoble que deshonra hasta a su propia esclavitud.

Un diputado, en el debate de este proyecto, sostuvo: «Yo sé que diversos sectores de la vida argentina están preocupados por la derogación de las leyes penales. Están preocupados, dice, para que se permita actuar nuevamente al comunismo o se quiten los obstáculos legales para que el peronismo haga su propaganda y actúe en el país.»

Por lo que leo, él no está preocupado por estas cosas de la vida pública que estimo graves y serias. En cambio, yo no concibo la democracia fuera de la libre expresión de la voluntad popular. Yo no admito la democracia al margen ni fuera del sufragio libre y cuando la democracia encuentra a su paso decretos monstruosos como los que debatimos, huye pero no se prostituye; la democracia no se fracciona; no se fabrica para unos y se la niega para otros. La democracia es una sola e indivisible, pero no admite otro ámbito ni otra esfera de vida que la plenitud del sufragio, sin limitaciones ni mutilaciones; libre, totalmente libre. Fuera de la libertad, la democracia es un sarcasmo, cuando no una mentira convencional en labios, generalmente, de políticos corrompidos y corruptores, aptos para todas las bajezas.

Naturalmente, el decreto 4.161 que derogaremos, y sus injertos, constituyen una afrenta a la democracia, la más típica expresión de la mediocridad política. Con ellos se defienden intereses y no principios, privilegios y no ideales, haciendo de la política no una lucha de principios sino una guerra de intereses. Con ello las ideas políticas toman formas humanas, se hacen hombres, y la lucha se libra cuerpo a cuerpo. Esto, yo diría, señor presidente, que más que una lucha de principios parece pugilato de patanes.

Sostengo, señor presidente, que, fuera de la verdad, la vida es un desierto, y fuera de la libertad la vida es un castigo. Querer encasillar el pensamiento en las frías paredes de una norma legal es aspiración y pasión de los déspotas, que se encarnizan en perseguirlo, mutilarlo o prostituirlo; pero ese es vano empeño mientras haya hombres amantes de la libertad y dispuestos a defenderla.

Pido disculpas a la Honorable Cámara por mi falta de estilo parlamentario. Cuando se trata de defender el derecho de los pueblos amenazados por el crimen de la tiranía no sé serenarme ni contenerme, menos aún callarme frente a cualquier expresión de despotismo.

Estos decretos lo son. El silencio es más culpable que el elogio, porque es el crimen sin valor; la palabra que se oculta es más vil que la palabra que se muestra, y los labios que callan son más miserables que los labios que mienten. Por eso, señor presidente, mi voz ha de resultar inorgánica y ruda, sistemáticamente rebelde. Poco me gusta hablar. Yo no uso ni quiero la tribuna como una cima para cosechar aplausos sino como un surco para sembrar ideas, como un campo para lidiar batallas. Por eso mi oratoria resulta acre y violenta, en donde su hosca franqueza mata su belleza. Me apasionan los gestos heroicos; por eso soy un admirador ferviente de aquellos tindárides gemelos, de esos tindárides de la pasión que un día saltaron sobre el pavés de la vieja Roma para salvar la libertad y sólo consiguieron perecer con ella: he querido decir, señor presidente, los Gracos.

Los antecedentes que abonan nuestra historia institucional son numerosos; los encontramos en todo el trayecto de la vida institucional: en el Cabildo Abierto del 22 de mayo, en 1812, en 1813, en los Estatutos del 15, del 17, en las Constituciones del 19 y del 26. En el espíritu de 22 Estados americanos, la libertad de pensamiento es la principal fuente de inspiración, y estos decretos que hoy derogamos son la antítesis de ese espíritu: éstos son los productos de aprendices de déspota con profunda alma de esclavos. Barrerlos de la faz institucional es hacer justicia a nuestra tradición. Ser justo es la mejor manera de ser libre, ya que no hay justicia posible fuera de la libertad.

A mí no se me escapa que en las épocas de sombras en que tócanos vivir, un hombre libre es un espectáculo raro y magnífico. No lo soportan los tiranos, y es lo primero que procuran suprimir de la vista de los pueblos. Ello se explica: un hombre libre, más que un ejemplo es un peligro, y suprimirlo es el deber de conservación de toda tiranía.

Los decretos que derogamos son tiránicos. Yo no conozco en la historia una sola tiranía que no haya tenido por carácter la persecución encarnizada del pensamiento libre. Así vemos que se lo quema con Savonarola, se lo persigue con Mazzini, se lo proscribió con Hugo; se lo lapida siempre, no se lo prostituye jamás. Estos decretos son expresión típica de esa tiranía: el pensamiento libre huye perseguido por los déspotas, y la libertad huye con él. Huye, pero no se prostituye. Los déspotas se encarnizan en conseguir lo que no han podido prostituir y se complacen en insultar a aquel pensamiento que no han podido sobornar.

Se pretende incluir en estos proyectos el artículo 213 bis del Código Penal. No comparto el criterio. Es defectuoso e inoportuno, y por otra parte, el caso está contemplado en el artículo 210 del mismo cuerpo legal. Por lo menos así lo entienden Sebastián Soler y Jiménez de

Asúa y yo comparto el pensamiento de esos grandes penalistas. En cambio creo que deben incluirse en la derogación los decretos 13.234 de 1948, y 13.955, cuyo artículo 2º es sencillamente monstruoso.

Sé que esta inclusión no caerá bien a ciertos espíritus. No me interesa. Yo no tengo mis oídos acostumbrados a sentir solamente el mugir de las vacas y el balar de los corderos. A mí no me causa miedo el rugir de los leones, y me cuesta creer, y mucho menos admitir, que una patria como la nuestra esté, hasta este momento, tolerando decretos que mutilan el pensamiento humano. No podemos admitir sin avergonzarnos que en este país hayan regido y rijan decretos como los que estamos en el deber de derogar.

¿Cómo es posible admitir que esos decretos se hayan dictado en defensa de la democracia? La más inválida de las democracias, por propio decoro, no puede aceptar la afrenta disfrazada de defensa. Estos decretos jamás defendieron a la democracia, sino que ultrajaron la dignidad, amordazaron el pensamiento y tiranizaron la libertad.

Yo no quiero incursionar sobre la discusión técnico-jurídica de los decretos, es decir, si éstos deben, de acuerdo con su origen, ser derogados o invalidados, porque son nulos de nulidad absoluta, si los gobiernos defacto tienen o no facultad legislativa y, por ende, si pueden o no legislar. Yo no voy a incursionar en ese terreno, pero sí sostengo y afirmo que todo gobierno defacto en un sistema representativo, republicano y federal, no puede sino subordinar la acción legislativa a la expresa ratificación del Congreso. Esto no me lo dictan los tratadistas suecos ni escandinavos, sino que es un elemental principio de derecho común. El caso de estos decretos me inhibe de entrar en el terreno de las facultades y atribuciones de los gobiernos defacto. Sólo me basta saber que estos decretos atentan contra la libertad y la dignidad humanas y, por ende, derogarlos es una obligación ineludible de este Parlamento.

**Sr. Presidente.** — Tiene la palabra el señor senador doctor De Rege.

**Sr. De Rege.** — Señor presidente: el tema que hoy aborda el Parlamento es uno de los que debió tratar con mayor urgencia, porque se refiere a problemas que afectan directamente a la personalidad humana, la constriñen en su desenvolvimiento y entonces cada minuto que transcurre es una demora.

Nuestro país ha vivido durante todo el transcurso de su existencia, el enfrentamiento de sus grandes corrientes históricas. Nosotros creemos en la vigencia de un régimen político pluralista como condición esencial para la realización de la personalidad humana a fin de que el hombre pueda asumir la responsabilidad de sus actos. Para ello es necesario que la comunidad pueda expresarse en forma espontánea, sin restriccio-

nes que distorsionen su expectativa, sin que se le pretenda encauzar a través de moldes predeterminados. Pretendemos obtener para el pueblo argentino la más alta participación política, removiendo decididamente los obstáculos que, manifiesta o encubiertamente, pretenden impedirlo.

En esta lucha por la participación política, diversos partidos han enarbolado sucesivamente la bandera y han conseguido la ampliación de este concepto. Sin embargo, los distintos agravios que han tenido como destinatarios y como autores a todos los sectores, han enconado el resentimiento: unos tratan de eliminar a los otros de la realidad política argentina. Así ha sucedido, porque ellos se apoyan en normas manifiesta o encubiertamente restrictivas; y si a pesar de estas normas el sector discriminado accede al poder, comprensible será que haya acumulado resentimiento como para discriminar a quien lo discriminó.

Esto vale no sólo para el sector hoy discriminado sino para todos los sectores, desde hace muchos años a la fecha. Cuanto mayores sean las trabas arbitrarias, más violenta será la irrupción política de los proscritos. Por eso, bueno es tratar de remover obstáculos hoy si es que se pretende la paz mañana. Porque también es bueno que la comunidad encuentre, de una vez por todas, los objetivos para todos y realizados por todos. Porque la Nación Argentina únicamente podrá salir de la paralización económica, de la apatía política y de la inmersión social, mediante un esfuerzo conjunto y concertado, mediante la acción decidida de quienes desempeñan la silenciosa tarea de las fábricas, de las aulas o de los surcos, sin frenos subconscientes, sin reservas mentales.

Pero para que todos puedan realizar un sincero, auténtico esfuerzo comunitario, es necesario que todos los argentinos nos sintamos copartícipes de la comunidad; es necesario que todos, en forma conjunta, miremos hacia el futuro y no hacia los agravios del pasado.

En este momento histórico un sector se encuentra en el poder y otro proscrito. Alguien pide que el primer gesto surja de los proscritos, para el acercamiento.

Nosotros creemos que no puede haber amor propio de sectores en casos como éste; que cada uno está obligado a hacer lo que en justicia corresponde, aunque como consecuencia de los hondos resentimientos que aún permanecen, alguna actitud extemporánea nos irrite.

Sólo así, entendemos nosotros, lograremos la distensión que Argentina necesita para trabajar en paz y orden.

Todos debemos dar el primer paso. Estamos obligados por el imperio de un cristiano deber de amor a nuestro prójimo, al que no podemos mirar con resentimiento, y patrióticamente también se nos exige que con quienes convivimos

lo hagamos en comunidad y no como antagonistas permanentes.

La democracia es un régimen político pluralista que requiere para su existencia misma de la diversidad de concepciones. Esto enriquece al hombre, posibilitando su desarrollo y realización. Pero la democracia no autoriza, de manera alguna, el paternalismo democrático. Muchas veces, so pretexto de la defensa de la democracia, se ha pretendido distorsionar la voluntad de la comunidad en favor de diversos sectores. Eso no es ni justo ni políticamente conveniente. Por eso nuestro bloque propicia la derogación de las leyes represivas, porque pretende la existencia de regímenes políticos pluralistas en los cuales el hombre pueda manifestarse en forma plena, auténtica, sin distorsiones ni presiones arbitrarias. De esta manera creemos que se olvida realmente el pasado. No es con un acto voluntario de amnesia que se borrará parte o toda nuestra historia; los hechos pasados nos dividen, enfrentan y confunden, en la medida en que nuestro país no se encuentre abortado en una gran empresa nacional que se elabore y realice con el esfuerzo de todos. Mirando hacia adelante es como podremos dejar de mirar al pasado. Por eso esta sanción es esperada ansiosamente por los argentinos; por encima de circunstanciales diferencias, todos los argentinos esperan que la legislación represiva sea derogada totalmente.

Sin embargo, en la sanción de la Cámara de Diputados no han sido derogadas dos leyes fundamentales dentro del complicado régimen represivo que agobiara a la Argentina durante tantos años. No se derogan ni la ley 13.324 ni la 13.985. La primera es la que establece el denominado plan Conintes, la otra el delito contra la seguridad de la Nación.

Nosotros creemos que la Argentina debe contar con un adecuado y moderno régimen de defensa que consista, no tanto en normas punitivas como en un adecuado ordenamiento y coordinación del potencial nacional. Creemos que el moderno concepto de defensa nacional debe propender a un orgánico desarrollo económico-social, y la razonable utilización de medios técnicos naturales y permanentes, como para que una Nación se encuentre en condiciones de afrontar esfuerzos excepcionales sin detrimento de los sectores que la componen. Creemos que la legislación represiva, lejos de contribuir a un moderno concepto de la defensa nacional, contribuye a deteriorarla.

Los trabajadores argentinos tienen una idea clara de lo que significa el plan Conintes, lo han sufrido en carne propia, han sentido la acción de los tribunales militares, que reprimían sin defensa efectiva, con 25 años de prisión a quienes luchaban por una idea política. Saben y sienten la injusticia, la burla al sentido de la equidad que significa el hecho de que mientras estas sanciones se aplicaban, los golpistas habi-

tuales, los protagonistas de las permanentes revoluciones frustradas, como en el caso de San Luis, eran penados con sanciones irrisoriamente leves.

Esta discriminación política que significó la aplicación del plan Conintes al pueblo argentino la tiene presente, y la derogación de las leyes represivas con la exclusión del régimen del plan Conintes resulta burlada a sus ojos. No se nos escapa que este gobierno no ha usado del plan Conintes, pero hemos señalado la necesidad de que se realice un gran esfuerzo comunitario, que nos sintamos realmente hermanos de nuestros hermanos, unidos con un abrazo fraternal grande y trascendente. Eso no se logrará mientras no se adopte una actitud clara y definida de eliminación de estas verdaderas amenazas que penden sobre el pueblo argentino.

Desde su banca de diputado, el actual vicepresidente dijo en 1958: queremos derogar la ley 13.234, de organización de la Nación para tiempo de guerra. Hoy hacemos nuestras esas manifestaciones, pero pedimos que este régimen también lo haga.

En cuanto al régimen de castigo severo a quienes se enriquezcan en la función pública, manifestamos nuestro más decidido apoyo. Creemos que debe predicarse con el ejemplo, y así como pretendemos que desde el poder se dé ejemplo de respeto a los sectores políticos opositores a fin de que tengan autoridad moral para reclamarlo si mañana los que hoy son gobierno fueran proscritos, así mismo creemos que la moralización del país debe comenzar en los sectores dirigentes, castigando severa y efectivamente la inmoralidad y la corrupción administrativa.

También apoyamos, señor presidente, la iniciativa que tiende a moralizar los medios de pago como el cheque, como forma de restablecer la fe pública.

Sin embargo creemos que falta algo para que se logre el efecto fundamentalmente buscado por esta ley, que se ha calificado como de derogación de las leyes represivas. Creemos necesario adoptar una actitud, según hemos dicho, para restablecer el espíritu comunitario. Esta actitud es la de remover todos los obstáculos para obtener la mayor participación posible de todos los sectores políticos. Sin embargo, las tensiones que Argentina ha vivido durante todo este proceso han dejado un gran saldo de argentinos perjudicados por una acción en la que creyeron como medio para superar esta situación injusta que hoy derogamos.

Muchos argentinos con claros objetivos políticos han vulnerado normas que no están entre las derogadas cometiendo delitos conexos. Estos argentinos, desde las cárceles, estarán señalando la insuficiencia del acto que realizamos como medio del encuentro comunitario, como posibilidad de remoción de todo aquello que nos impide entendernos. Por eso propondremos en la discusión en particular la inserción de un ar-

tículo en el que se concrete una efectiva amnistía política que haga que todos volvamos a sentirnos real y verdaderamente hermanos. Nada más.

**Sr. Snopek.** — Pido la palabra.

**Sr. Presidente.** — Tiene la palabra el señor senador Snopek.

**Sr. Snopek.** — Señor presidente: el hecho de que por razones ajenas a mi voluntad no me haya sido posible disponer del tiempo necesario para realizar un estudio exhaustivo de las diversas materias que regulan el proyecto que se considera, me va a impedir realizar una exposición científica que contemple en forma metódica y con la profundidad requerida, las normas penales que se han agregado al ordenamiento propuesto para dejar sin vigencia a la legislación represiva anómala y agresora que todavía rige y se aplica no obstante las sabias y múltiples disposiciones de nuestra Constitución Nacional que garantizan la libertad.

Esa falta de disponibilidad de tiempo para el estudio detenido y particularizado de los diversos temas y mi propia salud un tanto quebrantada me obligarán pues a realizar exclusivamente una consideración general y somera de los nuevos preceptos que se proponen incorporar a nuestro Código Penal y las diversas modificaciones que se tratan de introducirles en procura, según se manifestó, de mejorar o actualizar sus diversas y añejas normas.

Hubiera sido de desear, como lo han expuesto los senadores preopinantes, que el proyecto en consideración se limitara exclusivamente a derogar la legislación penal de tipo especial y absolutamente anormal a que se refiere el artículo 1º de la sanción de la Honorable Cámara de Diputados, ello, sin perjuicio de la inclusión de las disposiciones accesorias que hubieran sido necesarias o indispensables para que esa derogación se realizara en plenitud y sin provocar mayores trastornos jurídicos.

Así hubieran quedado para otra oportunidad las normas proyectadas sobre reformas a nuestras reglas penales generales, regulares o permanentes. O, mejor todavía, hubiéramos tenido tiempo de dar a la República un nuevo código represivo de disposiciones armónicas y de contenido sistemático. La repetida modalidad de los congresos anteriores y del actual, de ir introduciendo reformas parciales a nuestro código, no sólo contraría los más elementales dictados de la técnica legislativa sino que altera la estructura de los cuerpos legales, rompiendo su método y agregando factores de disociación que van rompiendo la armonía jurídico-institucional de esta República.

Este sistema de parches o remiendos nuevos a una legislación que es preciso renovar desde sus bases puede conducir a una labor de interpretación muy dificultosa y que puede llevar incluso a un verdadero caos jurisprudencial. No dudo de que si las reformas son demasiado

urgentes y perentorias es preciso no demorar su sanción, pero han de hacerse las innovaciones, en cada caso, por leyes especiales que coordinen con los cuerpos legales que se modifican y sin romper su estructura sistemática, para que no tengamos un conjunto de leyes aisladas y dispersas de diversa orientación que puedan producir anarquía e impedir llegar al sistema orgánico que debe regir a la República.

Expuesto así, de un modo muy general, un punto de vista que nuestro sector ha venido manteniendo constantemente, debo expresar sin vacilaciones que, por nuestra parte, realizando una opción más entre las múltiples que hemos realizado en nuestro país, hemos optado por la sanción de la Cámara de Diputados, distinguiendo, eso sí, en forma clara, los dos aspectos que toca el ordenamiento que se encuentra a nuestra consideración. Por un lado la derogación de las leyes represivas anómalas, discriminatorias y abiertamente inconstitucionales, reglas especiales y particulares que están al margen o fuera del ámbito del derecho criminal común regulado por nuestro Código Penal; y de otro lado, las normas que se han añadido a este último código que, sancionado en el año 1921, va camino de cumplir ya su medio siglo de vida.

¿De dónde ha nacido la legislación excepcional que ha surgido al margen del Código Penal? O, mejor dicho, ¿cuándo se las hizo revivir? Hemos vivido y hemos contemplado los acontecimientos que precedieron a ese resurgimiento: hace dos años escasos se derrumba sin ningún estrépito la frágil, endeble y engañosa legalidad en que vivía el país; por decreto 4.419 del 19 de mayo de 1962, se declara en receso al Congreso de la Nación, lo que ya constituía una demasia, una extralimitación, un verdadero atentado institucional; pero como las demasías, extralimitaciones y abusos raras veces se circunscriben al límite en que nacieron o al círculo que los engendró, ocurrió que no mucho tiempo después, por decreto 9.904 del 6 de septiembre de 1962, se disolvió el Congreso Nacional prohibiéndose la entrada de diputados y senadores al Palacio Legislativo.

Así desaparecieron definitivamente las pocas y pobres manifestaciones que quedaban de nuestro régimen republicano, y así en ese ambiente comenzaron a nacer normas represivas irregulares, extrañas, exóticas, al margen de la legislación regular del país que es nuestro Código Penal.

Desaparecida o anulada la fiscalización de la opinión pública que estaba representada en su más alta jerarquía en el Congreso de la Nación, fue fácil ir consumando sucesivos y progresivos atentados a la libertad y a la dignidad personal.

Antes de este hecho, aún dentro del clima anormal e irregular que vivía la República, había manifestaciones de libertad. Me he de permitir referirme, sumariamente, a una de ellas.

El diputado Carlos Humberto Perette, en la Conferencia Interparlamentaria de Varsovia, expresaba: «El hombre tiene derechos que son inseparables de su estilo de vida, como la emisión de las ideas, el derecho de reunión, de prensa, asociación y controversia.» La transcripción de esta exposición puede verse en el Diario de Sesiones de la Cámara de Senadores del 10 de noviembre de 1959, página 2089. Y agregaba: «Exigimos respeto y vigencia de la declaración universal de los derechos humanos proclamada en 1948, que en muchas partes se viola y poco se hace para asegurar su cumplimiento.» Idem, página 2097.

La opinión pública no consintió las transgresiones o demasías. Los partidos políticos argentinos, a los que tanto se suele difamar injustamente, pero que son los voceros de esa opinión y una de las más altas manifestaciones del quehacer de la ciudadanía hicieron oír sus protestas y críticas. Y así fue como poco después de haber ocurrido toda esta serie de quebrantamientos y atentados, en marzo de 1963, ocho partidos políticos, a saber: la Unión Cívica Radical del Pueblo, el Partido Conservador Popular, el Partido Demócrata Cristiano, la Unión Cívica Radical Intransigente, el Partido Socialista Argentino y los representantes del Movimiento Justicialista, se reúnen en la Asamblea de la Civilidad y manifiestan categóricamente su propósito de bregar por la restauración de la normalidad constitucional a través de principios y conceptos que en realidad prestigian y enaltecen a la democracia argentina.

Y pasa el tiempo. Tras un paro; duro y doloroso proceso, recuperamos la actual legalidad constitucional. Muy artificiosas y distorsionadas fueron las normas que nos permitieron el acceso al status institucional en que vivimos, a este ambiente de esperanzada pacificación que podemos respirar y que tenemos el deber de conservar y perfeccionar.

Estamos hoy volviendo nuevamente sobre aquel tema, sin proponérselo quizás, repitiendo manifestaciones ya hechas públicas.

Tengo aquí una declaración del Centro de Abogados de Buenos Aires en que al expedirse precisamente sobre estos decretos leyes tiene a bien decir: «El derecho de expresar libremente las ideas es una garantía constitucional que se encuentra violada por la vigencia de los decretos leyes 4.161/56, 7.155/62 y 2.713/63, que crean el delito de opinión, más propio de cualquier país totalitario que del nuestro, que alardea de ser una democracia. Ya en 1853 la Asamblea Constituyente contestó al general Justo José de Urquiza en la forma que sigue: el opinar en política no es un crimen. Todo ciudadano en una república tiene derecho a manifestar lo que piensa y de contribuir con el tributo de su pensamiento a la felicidad común. Si las autoridades entre nosotros han restringido este derecho han hecho mal, y han faltado al

primer deber de toda autoridad humana, que consiste en conceder al hombre lo que Dios no le niega.»

En cuanto a los tratadistas del Derecho Penal, a los autores que ya se han mencionado en el curso de este debate, he de agregar que Eusebio Gómez refiriéndose al delito de opinión manifiesta: «La enunciación de las ideas por extremas, por erróneas o por nefastas que sean y su prédica, no constituye por sí un delito castigado por nuestras leyes. La propaganda doctrinaria no comporta otra cosa que el ejercicio de un derecho perfecto y natural reconocido por la Constitución a todo ser libre: el de libertad de conciencia, el de pensar y emitir ideas conforme a como la conciencia las dicta. No es con procedimientos inquisitoriales, levantando hogueras como en otros tiempos para quemar herejes, que se han de modificar y suprimir los extravíos de la conciencia. No es con persecuciones, con destierros o con prisiones que se extinguen las ideas. La fuerza llega en un momento dado a acallarlas, pero después renacen con más vigor con una fuerza acaso incontrastable.»

Y estamos nuevamente ante una frustrada esperanza popular. Las modificaciones que se introducen al proyecto de ley que se considera por la mayoría del Honorable Senado han de permitir postergar momentáneamente la derogación de todo este aparato represivo, anómalo, discriminatorio, agresivo y opresor de la libertad de pensamiento. Y es lamentable, porque todas las modificaciones que quiere introducir el dictamen de la mayoría, cuyos buenos propósitos no me es dado negar, hubiera sido posible que se hicieran en un ordenamiento por separado, poniendo, entre tanto, con la derogación de estas normas irregulares, un punto de partida alentador para la pacificación nacional.

Necesito aclarar que precisamente la subsistencia de esta legislación que impide la libre prédica de las ideas, es utilizada por provocadores y saboteadores para crear un clima artificial en la República. No podía dejar de decir esto para llamar la atención sobre la necesidad de derogar urgentemente todos estos ordenamientos. Es urgente que los que se enriquecen ilícitamente sustrayendo los dineros públicos o con maniobras dolosas, robando al pueblo parte de su patrimonio, sean sancionados. Eso sí es urgente. Nadie lo puede poner en discusión, pero la derogación de las leyes represivas anómalas es algo más urgente que eso. Exige un acto inmediato de este Congreso porque son una afrenta para el Poder Legislativo nacional y una afrenta para la Constitución misma, mientras rijan. Se está atentando contra las libertades públicas. En vano vamos a proclamar que vivimos en libertad mientras vivamos ateneados por el temor de que haya un policía que esté vigilando nuestro pensamiento y nuestras ideas... para encarcelarnos.

Honestamente creo que las modificaciones que se trata de introducir por la mayoría del Senado no son perentorias ni urgentes. Algunas de ellas son poco felices en su redacción, y puestas en manos inescrupulosas pueden servir de instrumentos para una odiosa persecución política.

El artículo 213 bis, inciso 1º), propuesto por la mayoría de este Senado, establece que son objeto de represión los que participaren en agrupaciones permanentes o eventuales que sin estar comprendidos en el artículo 210 del Código Penal, vale decir, sin estar comprendidos en la legislación general de esta República, tuvieran por objeto imponer sus ideas... ¿Qué político no quiere imponer sus ideas por métodos distintos a los que prevé el apartado final del artículo? Por eso digo que la redacción es poco feliz. No satisface el propósito que se tiene en vista; imponer las ideas por la persuasión no puede ser delito en este país ni en ninguna parte del mundo. Y agrega: «...o combatir las ajenas por la fuerza o el temor». Es que la redacción —repito— no es satisfactoria. Cambiando los términos, quizá, el precepto hubiera sido más aceptable. Vale decir que se debió haber puesto: tuvieran por objeto imponer por la fuerza o el temor sus ideas o combatir las ajenas. De donde la acción de imponer dimana su ilicitud de llevar ínsita, implícita, la fuerza o el temor.

Pero sostengo que aun cambiando la redacción no se trata de una norma necesaria que precise de una sanción inmediata y de extraordinaria urgencia, como es la que proponé la mayoría del Senado. Su falta no dejaría desgarnecido el orden público, ni dejaría impune esa serie de delitos. La armónica combinación de las normas de los artículos 210 y 211 de nuestra legislación regular y permanente que es nuestro Código Penal, permite reprimir los hechos que se propone penar mediante este artículo 213 bis, inciso 1º y que postula la mayoría.

No es verdad, como se ha expresado hace un momento en esta Cámara, que el Código Penal argentino no reprima la violencia. El delito de intimidación pública, que prevé y define el artículo 211 de nuestro Código Penal, pena...

**Sr. Fassi.** — ¿Me permite, señor senador?

**Sr. Snopek.** — ...el hecho de suscitar tumultos o desórdenes y hasta el de hacer señales o dar gritos de alarma que puedan conducir a cualquier peligro común.

Discúlpeme, doctor Fassi, pero yo no lo he interrumpido en su exposición...

**Sr. Fassi.** — No lo voy a interrumpir, señor senador.

**Sr. Presidente.** — Continúa en el uso de la palabra el señor senador Snopek.

**Sr. Snopek.** — Debo decir que este no es un pensamiento personal mío; en absoluto. Un tratadista de la seriedad de Eusebio Gómez, al referirse a este artículo 211 señala con claridad



que no es necesario siquiera que el efecto sobrevenga. Dice en la página 237 del tomo V de su Tratado de Derecho Penal: «La ley no lo requiere (se refiere al efecto). Sus términos son claros al estatuir la pena para el que realice los actos enumerados taxativamente con el objeto de infundir un temor público o suscitar tumultos o desórdenes.» Y luego agrega entre comillas, repitiendo nada menos que las enseñanzas de Mancini, uno de los hombres cumbres de la ciencia penal contemporánea: «El efecto querido por el agente de infundir temor público o de suscitar tumulto o público desorden es considerado como la meta objetiva y subjetiva del hecho y no como un efecto que deba concretamente averiguarse.» Y sigue Eusebio Gómez repitiendo las enseñanzas de Mancini: «La incriminación no está condicionada a la verificación de tal efecto, y ni siquiera está considerado en ello el peligro de semejante verificación. El daño del delito consiste en la perturbación de la tranquilidad pública, que es o se presume ocasionada siempre por el hecho del delincuente susceptible de producir tal efecto.»

Vale decir, que el propósito perseguido con la introducción de la norma del inciso 1º del artículo 213 bis, al Código Penal y que se postula por la mayoría de la comisión del Senado está previsto dentro del espíritu normativo del artículo 210 del actual Código Penal; y en lo que respecta, no ya a la fuerza o al temor, sino aún al solo hecho de suscitar tumultos o desórdenes o cosas semejantes a que esa norma se refiere. Y si ello se efectúa por agrupaciones, lo prevé también como figura independiente a través de la represión de la asociación ilícita del artículo anterior del mismo Código Penal, es decir, del artículo 210.

El artículo 210 trata también de un delito de peligro y no de resultado. No se pena porque la banda o la asociación ilícita consume un resultado sino por el hecho de formar parte de ella. Dice claramente la norma: «Será reprimido con reclusión o prisión de un mes a cinco años el que tomare parte en una asociación o banda de tres o más personas destinada a cometer delitos, por el solo hecho de ser miembro de la asociación.» ¡Por el solo hecho! Vale decir que si cualquiera de los integrantes de la banda o de la organización llega al resultado, comete un delito en concurso. Incluso para el caso que incurriera en tentativa, ésta iría en concurso con la asociación ilícita, que es figura por sí y tiene existencia propia dentro del Código Penal argentino.

Por eso decía, señores senadores, que no es urgente, de necesidad inmediata, la sanción de esta nueva norma del Código Penal. Más aún, introduciría un factor de desarmonía dentro de la estructura misma de dicho Código. Se rompería su sistema. Las grandes directivas que informan a este cuerpo legal se desmejorarían con la introducción de este precepto de por sí

anómalo y especial. Porque no obstante que se lo incorpore al Código Penal, está instituyendo una figura que es de sobreestructura, que está por encima de la que quiere adicionar, introduciendo una nueva modalidad de asociación ilícita, con el pensamiento de que la violencia no está penada por nuestro código represivo, lo que no es exacto.

Pero sigamos con el inciso 4º del artículo 213 bis. Por este artículo se trata de reprimir a los que públicamente instigaren a los militares o componentes de las fuerzas de seguridad a desobedecer las leyes o violar los deberes de la disciplina militar. Una primera duda me embarga y declaro sin temor y sin vergüenza que no la he resuelto, y es la de saber si este precepto está bien dentro del Código Penal o si en un estudio más profundo debemos tratar de introducirlo dentro del Código de Justicia Militar, porque el bien jurídico que se afectaría por la consumación de este hecho es, sin lugar a dudas, la violación de los deberes de la disciplina militar.

No creo tampoco que sea necesaria una sanción inmediata. Los delitos de rebelión y sedición, según bien lo ha sugerido el miembro informante de la mayoría, son para los derrotados, porque la revolución triunfante, aquí o en cualquier lugar del mundo, suele imponer su propio derecho.

¿Qué intimidación puede sentir frente a esta norma el hombre que está dispuesto a arriesgar su vida para consumir un golpe de Estado o un cuartelazo cualquiera? ¿Lo va a intimidar una pena de un mes a tres años que es excarcelable? Para el hombre que está dispuesto a complotarse con miembros de las fuerzas de seguridad de la Nación para derrocar a un gobierno considero, sinceramente, que el artículo no tiene poder intimidatorio.

Dejo formulada la sugestión de que si alguna vez una norma de este tipo se estimara necesaria —lo que no creo—, sea incorporada en el Código de Justicia Militar, porque pienso que lo lesionado por el hecho es la disciplina militar, estando a los términos del propio artículo que se propone.

Tengo mis serias dudas de que aunque llegáramos a sancionar este precepto pueda constituir siquiera una traba liviana para los gestores de revolución, para los que offician de conspiradores y, en general, para aquellos que en forma permanente o accidental viven conspirando contra la estabilidad jurídica de la República.

De todos modos, dejo sentado, en forma clara, mi pensamiento de que de ninguna manera existe una urgencia inmediata que imponga la sanción de este precepto. Están las respectivas normas del Código de Justicia Militar, por una parte, y las del Código Penal, por otra, que prevén la participación en el delito de rebelión, que pueden ser, en caso necesario, eficientes

para reprimir los hechos que este artículo propone castigar, por lo menos en una instancia intermedia, hasta que se sancionen las normas permanentes en un ordenamiento metódico, sistemático y armónico.

Tampoco creo feliz, no obstante las medulosas razones expuestas por el señor miembro informante de la mayoría, la modificación que se pretende introducir en cuanto al emplazamiento de la norma a que se refiere el artículo 6º del proyecto.

El dictamen de la mayoría propone emplazarlo como una violación de secretos, calificada, por cierto, dentro del título correspondiente a los delitos contra la libertad. Mientras que el despacho de la Cámara de Diputados, en mi concepto con más perfección, lo incluye en el título de «Delitos contra la Administración Pública» y en el capítulo que regla los abusos de autoridad y la violación de los deberes del funcionario público. Y, efectivamente, el bien tutelado, en el caso, el bien jurídico protegido, más que la libertad es la administración pública, porque se trata de proteger hechos, actuaciones o documentos que por ley deben quedar secretos y que tienen que ser necesariamente consumados por un funcionario público.

Eusebio Gómez, al referirse, por ejemplo, a este título del Código Penal, observa: «El funcionamiento de la administración pública debe ser tutelado por normas represivas de los hechos que puedan alterar su normalidad o el prestigio que merece. Sin esa tutela correría peligro la existencia misma del Estado. Exige ésta el desenvolvimiento regular de las múltiples instituciones que integran el complicado organismo de la administración pública». Agrega luego el autor citado: «Los que forman parte de la administración pública tienen a su cargo obligaciones cuyo incumplimiento origina el desquicio. Los ciudadanos, a su vez, están en el deber de prestar a la administración pública la cooperación indispensable para el desenvolvimiento de las actividades que le son propias». Vale decir, que el hecho que define y reprime la norma del artículo 6º del despacho es más un delito contra la administración pública que contra la libertad.

Pero se ha centrado aquí el debate sobre el tema del enriquecimiento ilícito de los funcionarios públicos. Se considera que un artículo puede operar el milagro de reprimir, como bien lo ha dicho el señor miembro informante de la mayoría, las distintas formas de corrupción, de peculado, de negociaciones incompatibles, que son de muy difícil prueba, tal cual se ha manifestado.

Pero el artículo propuesto es absolutamente inoperante para cumplir ese fin. Veamos a quién reprime el artículo que se propone. El artículo 268/2 dice que será reprimido con reclusión o prisión de 2 a 6 años e inhabilitación absoluta de 3 a 10 años, el que al ser debidamente requerido no justificare la procedencia de un

enriquecimiento patrimonial. Y me pregunto, ¿y el no requerido, qué pena tiene? ¿y el que no tiene requerimiento? ¿Dónde está la sanción, la norma punitiva, que autorice a disponer el requerimiento? El miembro informante de la mayoría, con buen criterio, y con la agilidad mental que caracteriza y pone de relieve en sus exposiciones, nos ha dicho que el requerimiento tiene que ser judicial; eso no surge de la norma proyectada que no dice que sea un requerimiento judicial; ella dice «debidamente requerido», en términos vagos; puede interpretarse por una ley reglamentaria que el que formula el requerimiento puede ser cualquier funcionario administrativo sujeto a los vaivenes de nuestra política, y convertirse así en una peligrosa arma de persecución, particularmente en lugares donde nuestra cultura cívica no ha alcanzado la altura que fuera de desear.

No quiero retacear de ninguna manera los buenos propósitos que puedan inspirar el despacho de la mayoría; estamos dispuestos a prestar nuestra más decidida colaboración para que se dicte una ley que prevea todas las formas y modalidades posibles de los hechos, para reprimir con eficacia el enriquecimiento ilícito de funcionarios públicos, que es una de las gangrenas que afectan a nuestro país, que constituye una vergüenza nacional.

Pero la norma propuesta por sí sola es inoperante; hay que dictar una ley amplia que prevea la diversidad de hechos reprochables. Admito, y es cierto, que la Cámara de Diputados ha cometido el error de considerar como enriquecimiento el peculado, cuando éste puede consistir hasta en la aceptación sólo de la promesa de la dádiva, porque ésta, por sí sola, ya corrompe la función pública; pero este texto que propone la mayoría, así, aisladamente, tengo mis serias dudas que pueda constituir el instrumento necesario para reprimir las diferentes y habilidosas formas del enriquecimiento ilícito de los funcionarios públicos. Y con el mayor de los respetos, sin interés de agraviar a nadie, penetrando en el fondo de la norma, quiero expresar que con ella puede ocurrir desgraciadamente lo que en el *Martín Fierro* se dice de la mala ley que es como «tela de araña» que la rompe «el bicho grande» y sólo «enrieda a los chicos». Esto porque hay que dar suficiente autoridad a los requirentes y hay que rodear a este requerimiento que se postula de las seguridades y la eficacia necesarias. Que no sea tan débil para que no queden en la impunidad los grandes autores de nuestros negociados públicos, pero que tampoco pueda constituirse en una arma arbitraria para consumir injusticias.

Siento la necesidad de decir que no tengo temor de que se impute a normas de este tipo la tacha de arbitrariedad o de inconstitucionalidad por la inversión de la prueba, pero hay que tener cuidado de que esa inversión no se confunda con una presunción de culpabilidad, porque

en ese momento se habrá puesto en peligro todo funcionario de la administración pública.

Hay que notar que dentro de nuestra organización formal, para la detención bastan los indicios vehementes de culpabilidad que los examina el más modesto funcionario policial, sujeto en provincias al poder político del Estado y que la prisión preventiva se dicta por lo que nosotros conocemos como la semiplena prueba o cuando se dan prima facie los caracteres del delito. Miren cuán peligroso puede ser el precepto proyectado jugando a la par de aquellos en virtud de los cuales se puede quitar la libertad a una persona. Y de qué modo la presunción de culpabilidad que puede estar ínsita a través de normas de esta naturaleza, conducir a encarcelamientos inexplicables.

En materia de enriquecimiento ilícito de los funcionarios públicos es preciso dictar un ordenamiento orgánico y completo. Una sola norma, repito, no basta; es absolutamente insuficiente para penar todas las diversas modalidades y gamas que adquiere este género de enriquecimiento de lucros indebidos.

Indudablemente que cuando se haga su ordenamiento sistemático y armónico, los jueces son los que en definitiva van a aplicar, sí, la norma penal, van a confrontar la dificultad probatoria y aplicar la consabida regla de Gorphe que cuanto más difícil es la prueba más fácil debe ser al juez formar la convicción con los datos y elementos de que disponga dentro del proceso. Pero interin llega su hora ¿es tan urgente y tan perentorio dictar esta norma? Yo creo que los grandes negociados en el país ya se han consumado y como lo proyectado solo puede regir para el futuro, no hay premura en dictarla, más cuando se corre el riesgo de error. Como las normas son más preventivas que represivas, la cautela se impone y deben extremarse los cuidados para darles seguridad y eficacia. Entonces fuerza es que no nos apuremos demasiado en materia penal, la más difícil, la más peligrosa, la más extraordinaria.

No deseo que se me diga que estoy fabricando varas con las que después voy a ser azotado. Si es con justicia, si es con rectitud, si es con dignidad, bien haya el castigo de las varas; pero si ha de serlo para la arbitrariedad, debemos luchar contra ellas.

Pido a los miembros de la mayoría, y desde ya ratifico que ofrecemos por adelantado nuestra colaboración, que hagamos un cuerpo sistemático y armónico para penar todas las formas de enriquecimiento de funcionarios públicos, pero no soltemos una norma aislada que puede ser peligrosa y producir dolorosas consecuencias.

Por estas razones y las expuestas por quienes sostienen el despacho de la Cámara de Diputados, considero que éste debe mantenerse, abriendo así la instancia necesaria para que el país viva en tranquilidad y podamos los argentinos todos, en una unidad fraternal, realizar los gran-

des objetivos que previeron nuestros mayores y que consagra nuestra Constitución.

**Sr. Cantoni.** — Pido la palabra.

**Sr. Presidente.** — Tiene la palabra el señor senador Cantoni.

**Sr. Cantoni.** — Señor presidente: no podía estar ausente el bloquismo de este importante debate que ha de poner término, seguramente, a una legislación de excepción que, si se explicó en las difíciles y anormales circunstancias que la determinaron, de ninguna manera puede perpetuarse dentro de los marcos legales de un país que marcha día a día y con firmeza a reencontrarse con el derecho y con el principio básico de la democracia: la libertad.

En la navidad de 1955, un político argentino, fogueado en bravas lides cívicas, actor de una etapa apasionada que, a despecho de los enfrentamientos cruentos que la ensombrecieron fue fecunda en realizaciones positivas para el progreso nacional, recogió en San Juan la bandera que inicialmente levantara entre el fragor del estallido militar de aquel entonces el teniente general Lonardi.

La proclama que debió haber sido el fundamento de una nueva era fue prontamente olvidada; pero Federico Cantoni la izó como enseña de la reconstrucción espiritual que necesitaba San Juan, tanto como el resto de la República, después del desencuentro fratricida, y así fue que rehizo los cuadros del bloquismo e hizo un llamamiento a la conciliación para que todos los sanjuaninos trabajaran con fe en el futuro. Y en su mensaje navideño de hace nueve años, cuando viejas pasiones eran reemplazadas por nuevas pasiones, aquel luchador, a fuer de las cicatrices que pudieron endurecerlo por mil peleas en defensa del ideal, anatematizó la venganza y condenó la proscripción. Y cuando se aprestaba a salir de San Juan para recorrer los caminos del país, en un intento por persuadir a todos los argentinos para que perdonándose mutuamente volviesen a la sensatez, caía abatido por la muerte imprevista mientras presidía un acto partidario insuflado de paz y de tolerancia.

Se comprenderá por qué, además de mis convicciones y de mi lealtad a una trayectoria política, soy consecuente con una clara ejecutoria que se enraiza con la voz y la doctrina de los fundadores del Bloquismo, que sigue siendo hoy una vigorosa expresión de republicano federalista.

Señores senadores: por muchas encrucijadas de dolor, de sangre y de martirio, tuvo que andar la patria en su lucha histórica para constituirse como nación libre e independiente y ser verdaderamente grande ante propios y extraños en el concierto del mundo civilizado.

El 25 de Mayo de 1810 nos dimos el primer gobierno, y cuando los patriotas reforzaban hacia los cuatro cardinales la flamante heredad haciendo frente al dominador que se resistía con fiereza a abandonar su antigua posesión, tuvimos que segar vidas preciosas en Cabeza de

Tigre. Allí cayó Liniers, el héroe que se jugó con gloria ante los invasores ingleses. Después vinieron las horas inciertas de la consolidación; mientras se juraba la independencia en Tucumán y el Libertador consumaba su epopeya llevando sus granaderos hasta la línea ecuatorial del continente Sur, la anarquía comenzaba a roernos por todas partes y muy pronto la guerra civil nos envolvía con todas sus miserias. Unitarios y federales se trabaron en sanguinarias batallas y los argentinos caían bajo los pelotones de fusilamiento de los triunfadores ocasionales. En uno y otro bando hubieron proezas y actos de heroísmo, pero también en uno y otro bando hubieron muchas y tremendas injusticias.

Después de Caseros, la patria entró en la organización, pero no concluyó la lucha entre hermanos. El Chacho, López Jordán, el mismo Urquiza, caían víctimas de las facciones encontradas. A esta etapa siguió un largo proceso signado por el afán de integrarnos en una democracia seria y responsable, en que la ciudadanía fuese en verdad depositaria de la soberanía popular. Vino la era de los grandes partidos, no sin pasar por una embrionaria sucesión de desordenadas agrupaciones cívicas preñadas de choques sangrientos, atropello al adversario, fraudes y carcelazos. Sáenz Peña produjo el hecho decisivo para imponer la certeza de la soberanía del pueblo. Pudimos proclamar, entonces, que comenzaba en la República el reinado de la democracia. La democracia adquiría luego vivencia multitudinaria: el poder político no estaba más reservado a minorías selectas, sino a las auténticas mayorías. Pero los enfrentamientos entre los argentinos proseguirían. Las batallas electorales se resolvían, a veces, en choques irreconciliables, con toda su secuela de rencores y los gobiernos se turnaban en el empleo de procedimientos de lesa civilidad frente a la oposición, en tanto ésta, como réplica, no era menos decidida en sus ataques destructivos para minar a los oficialismos. Este aspecto negativo de las prácticas cívicas no llegó, por supuesto, a minar la voluntad creadora de la Nación, porque fue mucho más pujante el esfuerzo positivo para acrecer la riqueza de nuestro suelo, incorporar a nuestro acervo nativo los beneficios de la civilización universal y colocar a la Argentina entre los países más progresistas del mundo. Nuestros campos, por el trabajo argentino y el aporte del pionero, al que se sumó el extranjero de buena voluntad, fueron la fecundante exteriorización de una grandeza que nos enorgullecía. En el orden internacional señalamos normas basales para el derecho universal. Junto a los campos, levantamos fábricas y muy pronto las chimeneas insinuaban también un porvenir industrial entre núcleos urbanos, cada vez más densamente poblados. La Argentina, pese a todo, era un sinónimo de grandeza. Pero, justo es reconocer que en el camino hubieron mu-

chas frustraciones y en la lucha por el mañana, que siempre hemos querido más venturoso, nos dejamos llevar por la pasión.

Nadie en este país puede arrojar la primera piedra. Los sanjuaninos sabemos bastante de esto. A nuestros mayores se les imputaron todos los pecados, se les señalaron los ciertos pero también se les inventaron otros.

Cuando se recrimina el pasado no hay que olvidar la viga en el propio ojo. Antes de anatematizar al adversario es menester despojarnos de ciertos olvidos y mirar también en nuestro mismo pasado; es probable que encontremos en el nuestro los pecados que se quieren ver en los demás. Nadie, pues, puede erigirse hoy en vestal de la democracia y autotitularse en depositario de su pureza, si queremos sinceramente contribuir a forjar un porvenir sin proscripciones, sin «muertos civiles», sin las aberraciones que hoy nos disponemos a derogar por vía de la ley.

Señor presidente: se está poniendo cierto énfasis, por parte de sectores fácilmente identificables, en cuestionar el derecho de las mayorías. Se argumenta que las mayorías, una vez en el gobierno, son presa fácil del totalitarismo. Les sirve bien el ejemplo de algunos dictadores europeos, que llegaron inicialmente al poder por el voto mayoritario de sus pueblos. Esta tesis, a la que se están aferrando algunas expresiones que se dicen democráticas, y que se esgrime con evidente intención bajo la influencia de las circunstancias especiales por las que atraviesa el país, envuelve naturalmente el intento de las minorías por subrogar el derecho de las mayorías, con lo que se distorsionaría de tal manera el concepto de la democracia hasta provocar su defunción.

A la tesis enunciada, a la que se le está batiendo el parche con insistencia sospechosa; se la enlaza con el derecho preventivo de la minoría. Y el derecho preventivo de las minorías no es otra cosa que el golpismo o la permanente subversión para que las mayorías no tengan acceso al comicio y, por consiguiente, al gobierno.

Entre el riesgo de que una mayoría se trueque en dictadura y el riesgo de que una minoría degenera también en un régimen autocrático, prefiero correr el riesgo con la primera, es decir, prefiero utilizar el camino que nos lleve a la vigencia plena de la democracia, o sea a la libre expresión de las ideas por todos los partidos políticos, sin diferencia alguna.

Las circunstancias que en la actualidad hacen creer en riesgos para el futuro y para la preservación de la democracia, no son tan graves como las quieren presentar los partidarios de la «tesis preventiva». Por estas consideraciones, y en nombre de la democracia, voy a votar por la derogación de la legislación represiva, tal como ha venido en revisión de la Honorable Cámara de Diputados, en la seguridad de que nos comprometemos todos los sectores para que a la

mayor brevedad posible dotemos al país de una legislación responsable, exenta de pasionismo, no sujeta a condiciones circunstanciales, para preservarlo de todas las contingencias que puedan amenazar su estructura democrática, republicana, representativa y federal.

Con este compromiso de honor para resguardar a la Nación de sus enemigos de adentro y de afuera, enterraremos el odio a la par que cimentaremos un despertar de esperanza. Nada más.

**Sr. Presidente.** — Se va a votar en general el dictamen de la mayoría de la comisión.

—Se vota, y resulta afirmativa.

10

# MOCION

**Sr. Fassi.** — Pido la palabra.

**Sr. Presidente.** — Tiene la palabra el señor senador Fassi.

**Sr. Fassi.** — Es para hacer moción de pasar a cuarto intermedio hasta hoy a las 15, para continuar este debate.

**Sr. Presidente.** — Y sin perjuicio de la ampliación que pueda proponerse.

**Sr. Fassi.** — Sin perjuicio de considerar los asuntos que correspondan al día de mañana.

**Sr. Presidente.** — Se va a votar la moción formulada por el señor senador Fassi.

—Se vota, y resulta afirmativa.

**Sr. Presidente.** — Invito al honorable cuerpo a pasar a cuarto intermedio hasta luego a las 15.

—Se pasa a cuarto intermedio a la hora 0 y 20 del 29 de octubre.

ENRIQUE DILLON  
Director del Cuerpo de Taquígrafos.